



Guillermo Lora

**Los obreros salvaran
las minas**

Ediciones **MASAS**

La Paz - Bolivia

1986

Indice

Objetivo	3
La situación política	7
La marcha minera por la vida	23
La huelga de hambre	34
Sobre el convenio-traicion	40

Los obreros salvaran las minas

(De la marcha por la vida a la huelga de hambre)

I

Objetivo

Las acciones callejeras multitudinarias, protagonizadas por diversos sectores sociales, la huelga general de los mineros, interrumpida la marcha de Oruro a La Paz y el ayuno voluntario, fueron expresiones de la agudización de la lucha de clases, del tránsito de una situación pre-revolucionaria a una francamente revolucionaria, de un proceso contradictorio de avances, retrocesos y frustraciones, aunque no se dio una contundente derrota, capaz de iniciar un período contrarrevolucionario.

No es casual que la izquierda pro-burguesa caiga atrapada en su propia cháchara acerca de la derrota y del retroceso de las masas. Es su confesión -apenas velada- de que sus ideas y su actividad se reducen a servir a la clase dominante. Como resulta sumamente difícil negar con alguna coherencia que las masas siguen luchando -los hechos vuelven a demostrar su testarudez-, se recurre a algunas argucias en el vano intento de negar o deformar lo que está sucediendo ante nuestros ojos.

Se ha insinuado que una cosa sería la derrota política -de ciertos planteamientos- y otra muy diferente la derrota física -una masacre, por ejemplo-, estando separados ambos. Esta es una tontería. Lo decisivo -subrayamos el término- es el aplastamiento físico del movimiento obrero en ascenso, las ideas reaccionarias en las cabezas de los trabajadores vendrán después, como consecuencia de aquel. Esto enseña una larga experiencia y también la teoría.

El objetivo central del escrito que va a leerse es el de revelar las tendencias básicas que se agitaron en el seno de las masas a la largo de los mencionados acontecimientos, tendencias que expresan la evolución de la conciencia de clase, basamento de las modificaciones de la situación política. Se suele decir que para juzgar los hechos históricos hace falta que transcurra el tiempo, para poder comprenderlos en toda su perspectiva y al margen del subjetivismo. Ahora es más oportuno que nunca señalar hacia dónde se dirigen las masas explotadas, qué tendencias motorizan su actividad, por eso nos parece que el análisis que presentamos obedece a una impostergable necesidad. No somos observadores imparciales de los acontecimientos político-sociales, sino que abiertamente ocupamos la trinchera abierta por el movimiento obrero. Crítica y autocrítica son inseparables del proceso de rearmamento de las masas, de la revista de sus armas antes de lanzarse a un nuevo asalto.

Después de la traición y desbaratamiento de la imponente huelga de hambre, continuó la huelga general -cuyo objetivo era el aplastamiento del plan gubernamental de rehabilitación de las minas- y el descontento encontró un otro canal para exteriorizarse:

la lucha frontal y airada contra la burocracia traidora. No se trata de algo nuevo, sino del extremo agravamiento del choque entre las capas avanzadas de las masas y los dirigentes comprometidos con la política, de la clase dominante. El convenio con el gobierno de fecha 13 de septiembre fue la gota que colmó el vaso. La lucha antiburocrática constituye una tradición valiosa dentro del sindicalismo boliviano.

La huelga de hambre sacudió las fibras más íntimas del país, no únicamente por sus contornos dramáticos o su gran volumen, sino porque en su desarrollo emergió desde las entrañas de las masas el bosquejo de la dirección revolucionaria. Ante el hecho la reacción fue dispar: sorpresa, alegría, esperanza desbordante y hasta terror, pero en ningún momento indiferencia, prueba de que se tocaba un problema básico. Quedó abierta la perspectiva de la expulsión de la burocracia corrupta de las filas sindicales y de su sustitución por una dirección que esté a la altura de las masas radicalizadas. Se trata del resultado de una larga batalla que viene librando la tendencia revolucionaria -expresión de la estrategia del proletariado- contra la burocracia empeñada en perpetuar el orden social imperante.

Si se toma en cuenta que los principales protagonistas del ayuno voluntario -particularmente los componentes del famoso piquete de la Sección Animas de Siglo XX- estuvieron también en la marcha hacia La Paz y se observa las diferencias de la actitud que asumieron en ambas ocasiones, se tiene que concluir que se produjo una maduración en la conciencia de las masas. Ahora podemos decir que esa maduración permite que aflore inconfundible la política revolucionaria del proletariado, esencialmente antiburocrática, porque la burocracia sindical -costra que se ha ido acumulando en la piel de la clase, excrecencia, tumor maligno- es obrera por su origen y burguesa por su política, por su conducta y hasta por sus costumbres, se ha vuelto burguesa por desclasamiento. La revolución en su lucha ascendente, aunque después pueda nacer en sus poros el tumor burocrático, es incompatible con la existencia de la burocracia. La lucha de clases se proyecta, a su modo, en el choque entre las masas y la burocracia.

En el proceso de la revolución boliviana, la urgencia de aplastar a la burocracia sindical -soporte e instrumento del Estado y de la patronal, en último término del imperialismo- se convierte en la clave de la profundidad del ascenso y de la victoria. Ahora -después de la marcha y de la huelga de hambre- emerge con toda nitidez la evidencia de que entre las masas y la política revolucionaria -la dirección revolucionaria- se interpone el obstáculo de la burocracia sindical. Esto explica que el proletariado, en su afán de subrayar su independencia de clase, de expresar sus propios objetivos estratégicos, -su política revolucionaria-, tenga necesariamente que cumplir la tarea de barrer del camino el obstáculo burocrático.

Si estuviéramos viviendo una etapa de derrota y de aplastamiento de las masas -en la que afloran las ideas reaccionarias y los prejuicios, en la que las ideas de la clase dominante muestran su predominio sin atenuantes- se opacaría la conciencia de la clase y la dirección revolucionaria aparecería totalmente aislada; en este caso sería suficiente realizar un trabajo de asimilación crítica de todo lo logrado por los explotados en su lucha precedente, logros que serían acumulados en su arsenal ideológico. Mas este no es el caso, los explotados se encuentran en plena lucha, por eso tiene enorme

importancia el poder señalar el camino que seguirán éstos.

La burocracia sindical ha enraizado en varias capas de la clase obrera y normalmente saca ventaja del conservadurismo y atraso de vastas capas de las masas. Por eso su extirpación será necesariamente un largo y dificultoso proceso. Se pasara por avances y retrocesos en la lucha antiburocrática. La fuerza básica del antiburocratismo radica en la presión de las masas, que se nutre generalmente en el impulso instintivo de estas últimas.

No ha sido nuestro propósito escribir un relato detallado de todo lo sucedido y en este aspecto pueden anotarse muchas deficiencias, sino una interpretación política de los acontecimientos, con miras a contribuir al fortalecimiento del movimiento revolucionario. Quedaremos satisfechos al constatar que en alguna forma ha sido cumplida esta finalidad.

En el calor de la lucha hemos ido apuntando la interpretación de las vicisitudes de la movilización multitudinaria y las posibles grandes líneas que podía seguir. Ha habido oportunidad ni tiempo para calibrar el grado de validez de las conclusiones en la piedra de toque de la experiencia diaria. Con el presente escrito culmina el paciente y largo trabajo de discusión y análisis realizado en el periódico "Masas" de los números 1040 al 1044, en "La Colmena" y en los cursos dictados en la Universidad Popular "César Lora" de La Paz.

La huelga de hambre ha evidenciado la identidad del Partido Obrero Revolucionario -del trotskismo- con la clase obrera consciente; aquel partido expresa en su programa -en su actividad cotidiana- la conciencia de clase del proletariado. De manera inevitable los trotskistas se diferencian nítidamente de la izquierda proburguesa y chocan con ella. Los revolucionarios defienden de manera intransigente su finalidad estratégica y subordinan a ésta todos sus movimientos. No pocos llaman a esta actitud -consecuencia de la independencia de clase y de la política revolucionaria- sectarismo perjudicial para el movimiento obrero y para la liberación de los explotados. Se considera que la suerte del movimiento de las masas depende de que se logre -como resultado de un manipuleo en las cumbres- la unidad sin fisuras de todos los que se llaman socialistas o se reclaman de la clase obrera. Cuando se pregunta si este amplísimo frente debe constituirse para imponer el programa de la clase obrera, responden que no, que ese programa debe archivar para ser usado con legitimidad en un futuro indeterminado y que ahora corresponde limitarse a la táctica, El Partido Obrero Revolucionario se empeña en conformar la unidad de la nación oprimida -varias clases sociales explotadas y oprimidas por el imperialismo- bajo la dirección política del proletariado, es decir que usa la táctica del frente antiimperialista para poder materializar las tareas históricas de la clase revolucionaria. Cuando el partido de la clase obrera -su estado mayor- olvida su programa quiere decir que ha cambiado de contenido de clase -de finalidad estratégica- y de esta manera se convierte en partido obrero-burgués. La izquierda proburguesa tiene que ser combatida por el partido revolucionario, esto si realmente se quiere orientar a los explotados hacia su liberación. Resumiendo: unidad al servicio de la revolución, sí; unidad para apartar a los explotados de su finalidad estratégica, a fin de consolidar el régimen social imperante, no.

La insurgencia de la política obrera, revolucionaria, en, oposición a la burguesa, solamente puede darse como una descomunal polémica. La acentuación de la lucha de clases, las grandes movilizaciones masivas, no anulan ni postergan esta polémica, sino que la avivan, únicamente así el proletariado puede convertirse en caudillo nacional. El Partido Obrero Revolucionario sabe que tiene que derribar a las viejas ideas y a todas las formas de la política burguesa, esto de una manera sistemática y mucho más cuando los explotados ganan las calles. La comprensión de que así se contribuye a potenciar la lucha revolucionaria permite tener el valor suficiente para profundizar esta discusión. Los acontecimientos que analizamos se convirtieron en imponentes escenarios para el desarrollo de esa polémica. La misma insurrección agiganta la discusión y el choque entre los explotados y la burguesía.

II

La situación política

a)

La crisis económica capitalista mundial -una crisis estructural que evidencia la destrucción de las fuerzas productivas al chocar con la gran propiedad burguesa- saca a primer plano todos los aspectos negativos del atraso del país, del poco desarrollo del capitalismo, que se traduce en la monoproducción de minerales, en la baja productividad, en los altos costos, en la extrema estrechez del mercado interno que potencia al localismo regionalista, prueba de que la unidad nacional está lejos de ser una realidad.

La desocupación, la recesión industrial, la contracción del mercado, la caída vertical de las exportaciones, los bajos salarios, el hambre -consecuencias inmediatas de la crisis-, han exacerbado la lucha de las nacionalidades indígenas oprimidas. No es necesario reiterar la extrema gravedad de la crisis -en Bolivia adquiere contornos trágicos como consecuencia de su incorporación forzada a la economía capitalista mundial pese a su atraso y del total sometimiento del gobierno burgués a los dictados del imperialismo y a sus planes-, pero se debe relieves que la situación económica y el desarrollo del proceso político van creando las condiciones de la convulsión social, cuya amenaza quita el sueño al gobierno, a la clase dominante y también a la burocracia sindical, es decir a la izquierda proburguesa. Los trotskistas consideramos que lo que corresponde no es trabajar para evitar lo que se ha llamado "eclosión social" sino para potenciar políticamente ese proceso y prepararnos para actuar como dirección digna de los grandes avances que van realizando las masas. La debida comprensión teórico-política de la crisis y de todo lo que viene sucediendo, constituye el primer paso en la actuación revolucionaria, eso si no se busca cooperar con los opresores.

Los problemas nacionales -los grandes y los pequeños- se actualizan con una extremada agudeza y se tiene la impresión -equivocada, por cierto- que los numerosos volcanes en actividad son ya el caos, que esto es la revolución para muchos. Si se analizan por separado los innumerables problemas del país y si se pretende resolverlos también así, lo que se está haciendo es obstruir el camino de su solución radical que es una forma de defender el régimen imperante basado en la propiedad privada burguesa de los medios de producción. En esta forma antagónica de ver las cosas se expresa también la contradicción entre las corrientes revolucionarias-proletarias y las reaccionarias -burguesas-, que ahora ocupa el primer plano.

La agudización de la lucha de clases permite que alguno de los problemas sintetice a los demás, se enseñoree sobre éstos y hasta concluya mediatizándolos; de manera inevitable su solución radical es política -enfrentamiento de la nación oprimida con la clase dominante e imperialismo- y engloba a los otros problemas nacionales. Eso es lo que ha ocurrido con la minería -más concretamente, con la Corporación Minera de Bolivia en quiebra-, que deja de ser limitadamente una cuestión de leyes de cabeza de los minerales o de la productividad, para convertirse en saber qué clase social, qué Estado, son capaces de resolver tan descomunal problema nacional, no estrechamente

minero.

Los trabajadores actúan como la fuerza central en los esfuerzos encaminados a superar la crisis de la minería estatizada y al actuar así encarnan los intereses nacionales, pues la minería sigue siendo -pese a la caída de sus precios en el mercado internacional- la actividad más importante del país, por el volumen de la población que involucra, por la extensión de territorio que abarca y también porque sigue siendo productor de dólares, aunque sean de precio muy elevado. La superación de la quiebra de la minería será una superación de alcance nacional y su ruina definitiva equivaldría al hundimiento del país. Es fácil comprender que la cuestión no se reduce a recetas de corte técnico o administrativo, sino que las respuestas tienen que ser básicamente políticas, pues lo que está en juego es la totalidad de la vida nacional, la superación del atraso, el desarrollo económico global y acelerado. No bien se formula la necesidad de la inmediata superación de la crisis de la COMIBOL y el destino de los miles de mineros, salta a un primer plano la cuestión crucial de la incapacidad de los gobiernos burgueses -y particularmente de la actual dictadura policiaco militar- para emprender exitosamente tan descomunales tareas. Los problemas de la minería estatizada se ven agravados por la orientación antiestatista del gobierno actual -se insiste machaconamente que es neoliberal y que se encamina a dejar en manos del imperialismo, de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y de las transnacionales la solución de todos los problemas, entre ellos los de la minería.

Sería incorrecto plantear los problemas de la minería y su posible solución en frío y dentro de un esquema social estático, cuando, en realidad, emergen y se superan o se degradan en medio de un país en constante y acelerado cambio. Esta es la razón por la cual los mejores proyectos técnicos fracasan, se diría que fracasan sus ejecutores. En este terreno debe superarse todo fetichismo; los planes económicos no marchan ni se inter-relacionan entre sí solos, de la misma manera que las mercancías, como si tuvieran voluntad propia. Los planes técnicos -perfectos teóricamente, pero inviables en la práctica- se prueban en una cambiante realidad, determinada por las vicisitudes de la lucha de clases, y se justifican como instrumentos de una de las fuerzas antagónicas. Los planes, están ahí, como en un anaquel, y pueden elaborarse muchos más -este no es el factor definitivo, pues el problema no es técnico- e inmediatamente emerge la cuestión de saber qué gobierno, qué empresarios, en fin, qué clase social, son capaces de materializar los esquemas y los planes y éste es el aspecto decisivo del problema.

Cuando se agudiza la lucha de clases -como ahora-, cada uno de los contendientes plantea su respuesta a los problemas nacionales; una clase afirma su condición de caudillo nacional al dar respuesta a esos problemas que interesan al país, en nuestro caso el de la minería fundamentalmente. De esta manera los planes encuentran a sus ejecutores, a sus realizadores. Este planteamiento de las respuestas apunta, inevitablemente, hacia el control del poder político, hacia la conquista del gobierno, hacia la afirmación o sustitución de una clase social como clase dominante. El sostener que la superación de la bancarrota de la COMIBOL se trueca en lucha política, en lucha por el poder, importa considerar que el problema es propio de la clase obrera, pues ésta es la clase social revolucionaria por excelencia, que al libertarse tiene necesariamente que libertar a las clases mayoritarias, a la sociedad. Las soluciones propuestas por la burguesía y el

imperialismo no pueden ser de naturaleza similar a las planteadas por el proletariado, si lo fueran significaría que todo se reduce a cuestiones técnicas o secundarias; en verdad son cualitativamente diferentes, políticamente contrapuestas, pues se trata de empeños de solución a través del control del poder político. Esto significa que la respuesta obrera encierra una solución radical a los más grandes problemas nacionales por el camino de la revolución protagonizada por la nación oprimida acaudillada por el proletariado, más propiamente, por su vanguardia política. La lucha contra la destrucción de la Corporación Minera de Bolivia como empresa estatizada -única preocupación del imperialismo- es política porque emerge como objetivo de los trabajadores y de toda la nación oprimida.

La experiencia histórica nacional enseña que ya no se puede esperar que la descomunal quiebra de la COMIBOL pueda ser superada en el marco del capitalismo que se encuentra en plena declinación, considerado mundialmente; esa superación se dará con ayuda de los métodos socialistas de gobierno. Este planteamiento importa que el proletariado para sacar a la minería de la ruina debe tomar el poder; el Estado obrero, a nombre de la nación, comenzará estatizando los medios de producción, lo que le permitirá, por primera vez, planificar la economía. Se tiene que descartar -por ser un despropósito- que los métodos socialistas de gobierno puedan ser manejados por gobiernos burgueses, por muy "izquierdistas" y populares que sean. No pueden hacerlo aunque pretendan ocultar su filiación de clase detrás de una posición tercerista: ni con el capitalismo ni con el comunismo.

b)

La gastada y corrupta burocracia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia -legalista, enemiga de la acción directa de masas y de la violencia, partidaria a ultranza del diálogo con los gobiernos burgueses, que invariablemente la ha conducido a la capitulación- propuso, en el momento más agudo del conflicto, que se le entregasen las minas para que sean administradas por los trabajadores. Los reformistas permanecieron fieles -en su proposición aparentemente tan contradictoria- a su tradicional inconducta y a sus ideas políticas contra-revolucionarias: convertirse en administradores de las minas usurpadas por la burguesía. En otros países se ha dado el caso del traspaso, por decisión patronal, de fábricas quebradas -gota apenas perceptible en medio del mar económico capitalista turbulento- a grupos de obreros. Pero en ninguna parte, menos en Bolivia, convertida en hacienda del imperialismo norteamericano por voluntad adenomovimientista, a la clase dominante se le puede ocurrir ceder a los explotados la mitad del país, de su economía, de su política. En Bolivia el que maneja las minas es ya semi-gobierno, dueño de la mitad del país. Esto demuestra que no se trata de pedirle al gobierno que entregue las minas a la clase obrera, sino de que ésta las tome violentamente, al margen del ordenamiento jurídico, ideado, precisamente, para garantizar la propiedad de la burguesía sobre ellas. El desarrollo del proceso político social que estamos viviendo coloca a los explotados ante la necesidad de subvertir el estado de cosas imperante, una de las condiciones fundamentales para armar ideológica y políticamente al proletariado consiste en la comprensión de esta realidad y de este proceso; la misión del partido revolucionario no es otra que la de expresar y traducir en respuestas concretas, en consignas, lo que es ya idea difusa o impulso instintivo en las masas.

No debe esperarse que los mineros de base se encaminarán directa y mecánicamente hacia la ocupación de las minas -que en su momento será el paso más trascendental del proceso de transformación revolucionaria de la sociedad-, partiendo del convencimiento teórico o de la fuerza compulsiva que se quiera atribuir a la consigna, frecuentemente tipificada como partidista, sino como consecuencia de la madurez política de los protagonistas -evolución de su conciencia de clase-, lograda en su experiencia diaria y por la insoslayable respuesta que debe darse a la necesidad histórica emergente del desarrollo de la lucha de clases. El papel del partido revolucionario consiste en contribuir -con su acción y sus ideas en el seno de las masas- para que esa madurez se dé en el menor tiempo posible, en potenciarla y darle contenido político, lo que quiere decir que debe esforzarse porque esa madurez tenga como norte los objetivos históricos, generales o estratégicos de la clase.

No solamente las discusiones en las reuniones nacionales de los sindicatos, sino la que tiene lugar entre las diferentes tendencias políticas y las acciones de las masas, van girando -desde hace algún tiempo- alrededor de la factibilidad o no, de la oportunidad y de las perspectivas de la ocupación de las minas por los trabajadores; éstos al ocuparlas ya se convertirían en un poder político, en un semigobierno. La lucha de clases, en su extrema agudización, se traduce en la lucha entre los obreros por apoderarse de la COMIBOL, como empresa unitaria y estatizada, y el bloque burguesía-imperialismo, actuando a través de su Estado, que pugna por seguir siendo árbitro de la minería, aunque atrevidamente plantea su destrucción. La trascendencia de la ocupación -hay que subrayar que adquiere un carácter inconfundiblemente político- radica en que se convierte en el paso que puede permitir la salvación de la minería por la acción directa de la clase obrera y, a través de ésta, de la propia nación oprimida. Casi inmediatamente después la lucha de las masas y la pugna política se irán concentrando en el cumplimiento o en la frustración de la ocupación de las minas.

La ocupación de las minas -de igual manera que de las fábricas y de otros sectores de la producción- constituye una tradición del sindicalismo boliviano. La ocupación fue la forma que adquirió -por imposición de los acontecimientos del momento- la nacionalización de las minas en la memorable "Tesis de Pulacayo". En algunas oportunidades los mineros ocuparon los socavones y las instalaciones empresariales de manera instintiva. Se puede decir que constituye un método de lucha de los explotados y -como todo método de lucha, por otra parte- debe ser utilizado de acuerdo a las modificaciones que sufre la situación política. Lo que se puede decir ahora es que el propio proceso político, es decir, la evolución de la lucha de clases, actualizan la ocupación de las minas y la convierten en una necesidad que debe materializarse. Así se explica por qué tanto la burocracia sindical como la izquierda proburguesa actúan mancomunadamente -como si obedecieran a un comando único- para impedir la ocupación de las minas, como táctica fundamental en la lucha por la defensa de la minería estatizada. Han actuado y actúan de esta manera los dirigentes burocratizados -también los que plantearon la entrega de las minas a la FSTMB-, como consecuencia de su alineación política junto a la clase dominante, de su repudio a la violencia y de su certidumbre de que los gobiernos burgueses -UDP o alianza MNR-ADN- tienen la suficiente capacidad para rehabilitar a la Corporación Minera de Bolivia y también para consumir la liberación nacional. Por estas razones, la ocupación de las minas se convierte en la piedra de toque que puede

probar la validez o no de los planteamientos políticos de las clases sociales -y de sus partidos- en pugna. A esta altura palidecen las otras respuestas a la crisis de la minería frente al planteamiento de la ocupación obrera.

El Decreto 21377, que traduce al campo de la minería el antiestatista y liberal Decreto 21060, lejos de superar la quiebra de la COMIBOL, lo que hace es agravar el problema, esto porque busca descargar sobre los obreros todo el peso del descalabro, sin preocuparse de salvaguardar la integridad física de la fuerza de trabajo. La verdadera preservación de la COMIBOL radica en que pueda seguir funcionando y ocupando a los obreros. El cierre de las minas de estaño más grandes del país -apenas encubierto tras el proyecto de cooperativización- pone en evidencia la total caducidad del gobierno nacionalista burgués. La clase dominante muestra una extrema debilidad como clase exploradora, al extremo de que tiende a disolverse como Estado, como gobierno, no otra cosa significa que deje en manos de la metrópoli opresora y explotadora el control y la solución de los problemas fundamentales, incluyendo el de su supervivencia.

Hay que señalar con toda nitidez que los decretos 21060 y 21377 y todas sus variantes, incluido el plan de rehabilitación elaborado por la burocracia de la FSTMB, tienen que analizarse y comprenderse como hitos de esa incapacidad de la burguesía para poner a salvo la fuente básica de la economía y de la vida nacional, lo que necesariamente tiene que traducirse como imposibilidad de seguir siendo gobierno eficiente. Particularmente en la última época -que abarca también el tramo ya vivido del gobierno del MNR- se ha acentuado la desintegración de la clase dominante en el poder. Es sorprendente que el Estado burgués boliviano no pueda ya ni siquiera cumplir las funciones policiales dentro del territorio nacional; reiteradamente las autoridades -que en los hechos no son ya autoridad capaz de imponer la vigencia de la ley- han expresado que carecen de capacidad para erradicar el narcotráfico y consecuentes con esa declaración permiten que fuerzas regulares de los Estados Unidos las sustituyan en una tarea privativa de todo Estado, la policial. La situación semicolonial de Bolivia se ha agravado insospechadamente bajo los últimos gobiernos burgueses. Cuando algún sector de la burguesía sigue repitiendo mecánicamente la consigna de la liberación nacional, se convierte en motivo de burla. ¿Liberación nacional cuando todos los aspectos fundamentales del gobierno boliviano se resuelven u orientan en Washington por petición de los estadistas criollos?

El problema de la salvación de la minería -el carácter semicolonial del país obliga a que recorra el camino de la defensa y afirmación de la estatización de la COMIBOL-, por ser descomunal en su dimensión, nacional por incumbir al proletariado o clase revolucionaria por excelencia y porque de ella depende la existencia misma de Bolivia, se convierte en tarea fundamental de la clase obrera. Si el proletariado no existiera no podría plantearse una solución radical de los problemas bolivianos. A los escépticos hay que decirles que está presente como clase, como partido político, como programa, lo que supone que tiene capacidad para cumplir sus tareas propias y también las ajenas, por esto adquiere carácter de caudillo de la nación oprimida por el imperialismo.

Si se quiere salir del actual estado de empantanamiento del país, se tienen que plantear soluciones a la crisis de la minería desde el punto de vista de los trabajadores mineros, que tanto vale decir del proletariado. No estamos reduciendo el objetivo nacional a uno

estrechamente clasista, sino que al decir desde el punto de vista proletario estamos afirmando que tiene que ser una solución que coincide con los objetivos nacionales.

La izquierda proburguesa -y en esto vuelve a coincidir con la prédica burguesa- no va más allá de la defensa de lo hecho demagógicamente por el gobierno movimientista en octubre de 1952: estatización de la gran minería a la manera burguesa y no plebeya, no de toda la minería y sentando las bases para que vuelva al control imperialista. La revolución de abril fue una revolución social, proletaria, truncada en el momento en que la clase obrera impulsada por la "Tesis de Pulacayo" destruyó el aparato del Estado feudal-burgués y su ejército, pero no pudo tomar el poder político, el gobierno, en sus manos y lo entregó en bandeja de plata a su enemigo de clase, a un partido nacionalista de contenido burgués, pero que ya tímidamente planteaba los intereses generales de la inexistente burguesía industrial o nacional.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario -cuyo radicalismo y su servilismo obsecuente al imperialismo, se encarna en una sola persona, en Víctor Paz Estenssoro- reconstruyó el aparato del Estado burgués, incluyendo a las fuerzas armadas, como instrumento del imperialismo norteamericano. Así las minas pasaron a manos de la burguesía nativa y a través de éstas a las del imperialismo. La política de Paz Estenssoro, convertido en liberal y antiestatista, consiste en concretizar el traspaso físico de las minas -de la parte más importante, porque la mediana ya está en esa situación- a poder de las transnacionales. Esta es una política inconfundiblemente antinacional, antipopular y antiobrera, inclusive desde el punto de vista de la burguesía industrial, que no puede menos que estar interesada -menos en Bolivia- por manejar la economía para potenciarse a sí misma.

En un país atrasado -Bolivia lo es, como prueba su economía combinada- el estatismo debe profundizarse como respuesta a la política colonizadora de la metrópoli imperialista. El liberalismo deja, abiertas las puertas de par en par a la invasión del capital financiero. Una burguesía poderosa, revolucionaria, concentraría los medios de producción en manos del Estado para poder superar el atraso y lograr el desarrollo económico integral. No existen condiciones para esperar que se dé entre nosotros un proceso de este tipo.

La decadencia y desintegración de la clase dominante se traduce en la superposición de los intereses particulares de los empresarios sobre los objetivos generales de la clase, al extremo de que aquellos para lograr algunas ventajas no trepidan en limitar la fuerza y movimientos del administrador de los intereses de la burguesía en general, es decir, de su propio gobierno. La clase dominante caduca parece encaminarse a su autodestrucción como Estado; en un país semicolonial como es el nuestro esta tendencia se traduce en pro-imperialismo sin atenuantes. La burguesía nativa es clase caduca y parasitaria.

El gobierno movimientista -que con mucho cinismo proclama ser nacionalista- entrega gustosamente sus funciones fundamentales a empresas privadas y a veces directamente al imperialismo, a quien le permite instalar verdaderos enclaves territoriales, en los que imperan la soberanía y las leyes metropolitanas. Se ha llegado al extremo de que los servicios de inteligencia están controlados directamente por el imperio norteamericano; se ha convertido a las fuerzas armadas en una institución cuyos fines y suerte dependen

del Pentágono de Estados Unidos; se permite y se alienta que parte de la educación se planifique desde gobiernos extranjeros -Estados Unidos, Alemania, Francia-, de manera directa o a través de organismos intermedios; el control del comercio exterior está ya en manos de un consorcio europeo; el embajador norteamericano es un verdadero virrey. Está ya fuera de discusión la naturaleza semicolonial de Bolivia. La alianza "nacionalista" entre el MNR y la ADN se encamina atrevidamente a agravar esta situación, pugna por transformar al país de semicolonía en una vulgar hacienda.

Lo que ahora presenciamos -la repulsa de los empresarios capitalistas a su propio Estado- ha sido siempre uno de los rasgos visibles de la desintegración de la clase dominante como árbitro de la sociedad. Tasco -"El nacimiento del fascismo"- describe un proceso similar cuando se estructuraba el movimiento político encabezado por Mussolini, buscando capitalizar el descontento de grandes sectores de la clase obrera y de los mismos capitalistas, con la finalidad concreta de poner a salvo el orden social burgués: "Al mismo tiempo que pide (Mussolini) del gobierno una política exterior ultranacionalista, dirige su campaña contra el Estado. Con ella adula al anarquismo latente del pueblo italiano y sobre todo de la burguesía media: oficiales desmovilizados y descontentos, estudiantes incómodos en los bancos de la universidad, tenderos en lucha contra los impuestos, desclasados de todo tipo que quieren algo nuevo asegurando al fascismo naciente una aureola indispensable de anticonformismo y de herejía. Al mismo tiempo y por encima de todo esta campaña responde alas reivindicaciones de los industriales, de los comerciantes, de la burguesía capitalista en general. 'II Popolo d'Italia' proclama la incapacidad del Estado para administrar los servicios públicos y propone que éstos sean confiados a la industria privada y que el Estado se despoje de toda función económica. Esto se convierte en el leit motiv común de la agitación fascista y de las asambleas de las congregaciones económicas..." El totalitarismo fascista reaccionario se apoyó en las tendencias antiestatistas y liberaloides. Lo que actualmente hacen la ADN y el MNR no es algo inédito, sino que su antecedente se encuentra en la política burguesa italiana de 1918-1919, antecedente que puede ayudarnos a revelar cuál es la verdadera proyección del gorilismo fascista ostentando momentáneamente ropaje liberal, democrático, antiestatizante y de visitante de la China continental.

El Decreto de nacionalización de las minas -la medida más importante del MNR ha sido una deformación del planteamiento obrero y popular al respecto- ha usurpado las minas al pueblo boliviano y a los obreros en beneficio del imperialismo. Cuando en la víspera y en ese propio momento planteamos la tesis de que el radicalizado MNR, que atravesaba el punto más elevado de su popularidad, estaba condenado, por su naturaleza de clase, a concluir postrado de hinojos ante el imperialismo y aliado a éste a ejecutar una política represiva de la mayoría nacional, ya dejamos sentado el objetivo central de que la recuperación de las minas solamente podía darse como parte integrante del aplastamiento político del nacionalismo de contenido burgués, es decir, de la revolución protagonizada por la nación oprimida, políticamente dirigida por el proletariado.

Es después de tres décadas de una apasionante y polifacética lucha de clases que la consigna se concretiza como batalla antigubernamental, en la que uno de los puntos principales es, precisamente, el lograr que la clase dominante entreguista ya no siga usufructuando las minas que afrontan las consecuencias de la descomunal crisis capitalista

mundial. ¿Quién puede cumplir esta trascendental tarea? Únicamente el proletariado: para defender a la COMIBOL como fuente de trabajo y de salarlos tiene que derrotar al gobierno burgués que es tanto como decir al imperialismo, lo que equivale a plantear la necesidad histórica de arrancar las minas de manos de la servil clase dominante para devolverlas a los bolivianos. ¿Cómo puede materializarse este proceso contradictorio? No como cesión voluntaria de la burguesía en desintegración, lo que equivaldría a un regalo voluntario del control del poder político, pues semejante extremo no puede darse en el devenir histórico. Solamente puede efectivizarse como imposición violenta y autoritaria de los trabajadores mineros al gobierno actual y a la misma sociedad, pues será acción directa, violación del ordenamiento jurídico vigente, que no ora cosa es la ocupación de las minas por los obreros. Ahora se puede comprender debidamente por qué decimos que el desarrollo político-social que tiene lugar conduce a la ocupación de las minas, que es tanto como decir que conduce al aplanamiento del gobierno burgués, a la revolución dirigida por el proletariado.

c)

Si partimos de la evidencia de que presenciamos una extrema agudización del choque entre las masas y la alta dirección burocratizada de la FSTMB, consecuencia de la contradicción existente entre las tendencias revolucionarias y las proburguesas -que se expresan con mayor nitidez en el campo político-, constataremos que se concretiza en la lucha multitudinaria de los explotados contra la burocracia, en la afirmación de la respuesta obrera a la crisis de la minería que en su expresión más nítida aparece como antigubernamental, antiburocrática -que en el presente momento concentra las posiciones y actitudes antiimperialistas de defensa de la nación oprimida frente al poder opresor foráneo- y anticapitalista. El empuje de las masas se orienta instintivamente hacia la destrucción de la gran propiedad privada burguesa que, en el caso de la minería, se presenta como recuperación de la COMIBOL de manos de la dictadura policiaco-militar adenomovimientista.

A esta altura del desarrollo de la lucha de clases, el embate de los explotados contra la burguesía y su gobierno ha encontrado su expresión más elevada en el combate de las bases sindicalizadas contra la burocracia, que se ha presentado como el mejor soporte del orden social basado en la explotación y opresión de los trabajadores. Las masas van encontrando su cauce revolucionario y por eso tienden a eliminar el obstáculo burocrático, que hasta el momento apareció como imbatible. La adopción de una política revolucionaria por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia -la única que puede de manera efectiva defender y resolver los problemas de la COMIBOL- exige una dirección revolucionaria, Los dirigentes, ya derrotados por las masas en las últimas jornadas, han pretendido desviar los golpes descargados contra ellos hacia la discusión acerca de la integridad física de la organización sindical. Durante el último ampliado minero (La Paz, 27 de septiembre) los mismos que firmaron el convenio traidor no tuvieron el menor reparo en sostener que ellos no defendían su condición de dirigentes, sino la preservación de la entidad laboral. Resulta evidente que el fortalecimiento de la FSTMB tiene que darse por el camino de su desburocratización, del restablecimiento de la democracia sindical, en cuya base se encuentra la asamblea general, cuyas decisiones deben ser respetadas por los altos dirigentes como mandato imperativo.

Los últimos acontecimientos -en cuyo desarrollo ha ido predominando progresivamente la lucha antiburocrática- han dejado una valiosísima enseñanza que debe ser debidamente asimilada para poder potenciar la batalla alrededor de la necesaria reestructuración de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El antiburocratismo -inicialmente planteado, hace bastante tiempo, por el Partido Obrero Revolucionario y sus fracciones sindicales- aparece ahora como una actividad de las masas; se potencia en esta medida y fortalece a la dirección revolucionaria -la porista- que se venía moviendo en el seno de las masas a veces de manera imperceptible, determinando su afloramiento y convirtiéndose en el centro de la pugna política, la expresión más elevada de la lucha de clases.

Cuántas veces las masas han inventado a sus caudillos y siempre han sabido encontrar los canales por los cuales expresarse, de la misma manera en que han creado sus organizaciones y sus métodos de lucha. Esta vez particularmente en la huelga de hambre se han soldado con la dirección que ya se movía en su vientre. Se tiene la impresión de que la hubiere dado a luz. Esta es la garantía de que la madurez en la lucha cotidiana se traduzca rápida y fielmente en conciencia, en acción política. La lucha contra la burocracia tiene un elevado contenido político. La revolución destruye a las burocracias conservadoras y es incompatible con toda organización nacida o condicionada para actuar en el seno del aparato de opresión de la clase dominante, aunque existe el peligro posterior de burocratización del proceso. En todos los casos, es la clase dominante la que utiliza el recurso de la burocratización para doblegar a los explotados, para maniatarlos y desarmarlos ideológicamente esto porque la burocracia es el canal mediante el cual la política burguesa actúa y presiona en el seno de las masas. La conclusión salta a la vista: la burocracia y con mayor razón si es sindical constituye punto de apoyo e instrumento de la clase dominante. La revolución boliviana enseña hasta la saciedad que cuando marcha lo hace sobre los escombros de la burocracia obrera. La burocracia es caduca, fuerza conservadora y entronca en lo que ya es pasado, llega hasta nosotros como herencia del ayer. La corriente revolucionaria al actuar en el presente es siempre lo nuevo, el porvenir, por esto se ve obligada a destruir a la burocracia.

Los hechos han demostrado que la tendencia revolucionaria se expresa políticamente a través del Partido Obrero Revolucionario, esta es una de las razones por las cuales las masas al acentuar la evolución de su conciencia, al emanciparse del control ideológico y organizativo de la burocracia y al corribatirla, encuentran al trotskismo, se funden con él, que aparece como el polo fundamental de aglutinación de las fuerzas revolucionarias, de los sentimientos e intereses de las masas. Aquí radica la raíz de su acelerado potenciamiento.

La burguesía se está disolviendo como Estado, como autoridad, como rectora de la sociedad, sin embargo, sigue conservando su instinto de mando y por eso sabe perfectamente dónde se encuentra su más grande enemigo. Ni duda cabe que es ella la que timonea a esa Santa Alianza que concentra a la izquierda proburguesa, a la burocracia, a la jerarquía eclesiástica, al nacionalismo, a los agentes del imperialismo, y que de manera tan persistente y sistemática combate al POR (trotskismo) como expresión ultraizquierdista, causante del malestar social, de un presunto divisionismo sindical, de la destrucción de federaciones y confederaciones, etc. ¿Cómo pudo un único

Partido -sin aparato burocratizado y sin dinero, expresión de la pobreza de los bolivianos, y cercado por los "marxistas" y "trotskystas" del exterior- resistir y fortalecerse bajo arremetida tan descomunal, desde el punto de vista de su enorme capacidad económica, aunque esgrimiendo argumentos de bajísima calidad, mentiras e insultos? A veces las masas recorrían caminos extraviados, totalmente extraños al sendero revolucionario, lo que determinaba el aislamiento del POR, pero éste siguió invulnerable frente a los despiadados golpes de la reacción y de la "izquierda" derechizada. Se trata de un hecho sorprendente que los observadores y nuestros adversarios no han querido analizar. Algo más, no se trata únicamente de la campaña antiporista, de las mentiras, de la diatriba, sino de que los esfuerzos encaminados a lograr que la opinión pública rechace todo lo que dice o hace el POR, fueron seguidos -o acompañados- por la represión física de la policía, por los asesinatos, las prisiones, los confinamientos, los destierros, etc, pero el POR siguió de pie, no como una organización política más, condenada a desaparecer en cierto momento y a ser indefectiblemente olvidada, como es la historia de tantos y tantos partidos y grupos, sino como orientadora política de manera invariable, ya goce de mucha popularidad o se encuentre aislada, ya maneje organizativamente a las organizaciones de masas o sus militantes se encuentren en las bases. La influencia política del POR ya nadie discute, sino que todos admiran. Los sorprendentes logros trotskystas no han sido producto de las maniobras de aparatos ni de una provechosa inversión de dinero, muchas organizaciones son favorecidas por la publicidad porque la pagan a precio de oro, a miles de dólares cuando se trata de propaganda televisiva. Los sorprendentes logros que viene obteniendo y su propia existencia ejemplar, son la consecuencia de sus ideas revolucionarias, expresión de los objetivos estratégicos del proletariado, es decir, de las leyes de la historia. La liberación de los explotados, de la nación oprimida de Bolivia, pasa por las ideas y la acción del POR como vanguardia de la clase obrera, de los campesinos y de un país sojuzgado por el imperialismo.

Para decirlo de una manera concreta: el instinto de las masas, que anima su sorprendente lucha, se expresa políticamente en las ideas poristas. Las derrotas de los explotados son también las derrotas de este Partido, aunque no hubiese sido la dirección de las organizaciones populares en ese momento. La lucha de clases se ha traducido en la última época en el enfrentamiento de las respuestas dadas por el POR, como expresiones de la tendencia revolucionaria, con las fórmulas esgrimidas por la burguesía a través de las agrupaciones que difunden su política y son conocidas como "izquierdistas". De esta manera la lucha de clases aparece totalmente polarizada entre el POR -expresión de los intereses históricos de los explotados, repetimos- y la burguesía-imperialismo, políticamente apuntalados por la izquierda alineada detrás de la clase dominante, particularmente de sus expresiones democratizantes.

El hecho de que en un polo aparezca el POR solo, sin otros acompañantes políticos, pero soldándose más y más con los explotados, y en el otro la burguesía con toda su cohorte izquierdista, democrática, nacionalista, clerical, etc., prueba que excepcionalmente la lucha de clases se desarrolla con una nitidez y transparencia inéditas.

En un extremo está el proletariado a la cabeza de las corrientes revolucionarias, políticamente encarnadas en el POR, sin mayores elementos distorsionantes y en el otro la reacción, utilizando todos sus recursos para destruir al trotskismo, es decir para

decapitar al movimiento de masas.

La izquierda proburguesa ha quedado totalmente desnudada, obligada a echar por la borda toda su palabrería radical para mostrarse de cuerpo entero como democratizante, legalista, defensora de la gran propiedad privada y, en último término, del imperialismo. La burocracia y la izquierda que la alimenta en todo sentido, vienen siendo abiertamente apuntaladas y defendidas hasta por las manifestaciones más derechistas y pro-yanquis de la burguesía. El Ministro del Interior del gobierno Paz Estenssoro se lanzó a defender abiertamente a la burocracia que le hizo al oficialismo el favor de firmar un convenio destinado a facilitar la materialización del Decreto de destrucción de la COMIBOL. La alta jerarquía de la iglesia -que nunca ha ocultado su adhesión al régimen social imperante- ha adoptado la misma actitud. El adenista diputado Edgár Barrientos expresó su esperanza de que los mineros concluirían llamando a la dirección sindical, a Lechín y a López, a fin de que puedan arrinconar al extremismo de algunos sectores, etc. En 1946 se dio una situación política semejante, pero con algunas particularidades. La izquierda tradicional -el stalinista PIR- no tuvo el menor reparo en aliarse con la rosca minera -su criatura precisamente hará más tarde con el movimientismo silista- y en el campo obrero pudo actuar con ventaja el POR, pero también estaba presente a medias el MNR perseguido por la reacción victoriosa.

En las características puntualizadas más arriba se encuentra la diferencia del proceso político boliviano -la diferencia radica en que se encuentra encabezado por el proletariado- con el que tiene lugar en otros países del continente y de otras latitudes. El Partido Obrero Revolucionario no permite que la clase obrera se diluya en los frentes democráticos, en cuyo seno algunas manifestaciones políticas burguesas logran la dirección del movimiento.

El proceso político, las masas, la clase obrera, se encaminan hacia la revolución proletaria, proceso que pasa por el POR. Se trata de una necesidad histórica frente al problema de sacar al país de su postración, de su empantanamiento en la barbarie. Los males que actualmente confrontamos, nuestro atraso, la miseria, la desocupación, etc., son consecuencia del considerable rezagamiento de la revolución proletaria, pese a la extrema madurez de la base económica -madurez impuesta como fenómeno internacional- y a la evidencia de que la conciencia de la clase obrera ya ha conocido considerables avances. Hemos llegado a una situación tal que si no se da la revolución proletaria, si seguimos atrapados en el círculo vicioso que tiene como centros polares las formas de gobierno gorilas o las ficciones democratizantes, siempre bajo la influencia decisiva del imperialismo, concluiremos disolviéndonos en el charco del fascismo, de la extrema inmoralidad del narcotráfico, de la prostitución, del hambre, de la desocupación, etc. La clave de la superación de estas calamidades se encuentra en el impostergable potenciamiento de la dirección revolucionaria, del Partido Obrero Revolucionario, precisamente. No es suficiente que el trotskismo sea la dirección política de las masas -extremo reiteradamente demostrado-, sino que esa influencia ya palpable tiene que traducirse en dirección organizativa y dentro de lo posible sin tardanza. Las discusiones de la conferencia de 1986 del Partido Obrero Revolucionario han girado sobre esta cuestión vital (ver 'Respuesta a la situación política. Forjemos la dirección de

las masas”). La revolución proletaria -protagonizada por la nación oprimida- se perfila como una revolución verdaderamente liberadora, no sólo de la opresión foránea, sino del atraso, del pasado precapitalista, etc. El desafío de la construcción de la dirección de las masas es, pues, el desafío de la materialización de la revolución proletaria. Para los explotados esa dirección se concretiza como dirección sindical revolucionaria, pese a que no son la misma cosa. Lo peor que puede ocurrirle a un marxista es confundir a las masas con el partido, organización de parte de la vanguardia de la clase obrera. Dirigir a las masas quiere decir fortalecer al partido político. que concentra la conciencia de clase, la enunciación de los leyes del desarrollo y cambio sociales, de los objetivos históricos de la clase social revolucionaria.

d)

La defensa de la Corporación Minera de Bolivia como empresa estatizada, como fuente de trabajo, como importante eje de actividad económica de las poblaciones que viven en la misma medida en que las minas se encuentren en producción, desemboca -ya hemos indicado- en la necesidad de que la minería a estatizada y general pase a manos de los trabajadores. Esta solución al problema de la COMIBOL es formulada en la perspectiva de la conquista del poder por la nación oprimida, es decir, es planteada como política; consecuencia de la descomunal guerra en la que estamos inmersos y que no es otra cosa que la lucha de clases.

Los explotados se apoderan de las consignas y de los métodos de lucha en la medida en han madurado para materializarlos, es decir, cuando se ven obligados a apoderarse de ellos para sobremontar los obstáculos que aparecen su camino.

Esto explica por qué la ocupación de las minas no es ejecutada en el acto, pese a que constituye hilo de trascendencia en el camino de la superación radical de los problemas de la minería estatizada. Las masas están inmersas en la búsqueda de respuestas a problemas más concretos, más inmediatos del día y que tienen que resolverlos indefectiblemente para poder marchar hacia adelante. En este proceso de superación de las dificultades del instante maduran las masas para afrontar cuestiones de mayores dimensiones. Esto quiere decir que los mineros no tendrán más remedio que consumir la ocupación de las empresas de la COMIBOL en su momento.

Lo que corresponde es rastrear si en el movimiento de masas está latente o hace progresos la tendencia hacia la ocupación de las minas. Las actitudes de las explotados son contradictorias, no son estáticas, se encuentran en constante transformación y se proyectan hacia adelante o retroceden. Sería equivocado sostener que este proceso es consecuencia pura de las contradicciones internas, sin ninguna relación con los factores externos; contrariamente, está condicionado por la presión ejercitada por los fenómenos con los cuales se encuentra en inter-relación.

La traición de los dirigentes burocratizados al firmar un convenio que apenas si esconde la destrucción de las minas tras una fraseología convencional, que ha precipitado la repulsa de las masas hacia ellos `y que venía madurando desde hace tiempo; la carencia de perspectivas de superación de las condiciones de vida y de trabajo, vale decir, de

planes concretos de rehabilitación de la COMIBOL, han determinado la aparición de una poderosa tendencia que busca solucionar los problemas del día a través del retiro masivo de las minas en ruina en condiciones que en alguna forma permitan no caer en la miseria y hambruna extremas. Esto se traduce en la demanda de una pasable indemnización por desahucio: 1.500 a 2.000 millones de pesos por año, fuera de las indemnizaciones normales. Así se expresa le desesperación de los trabajadores, que no se detiene a considerar que en las actuales condiciones de recesión del mecanismo productivo, cuando no existen posibilidades inmediatas para su superación, los que se retiren no tendrán perspectivas para volver a trabajar en el resto de sus días, que necesariamente serán empujados a la situación lamentable de morir de hambre por inanición y de ver desintegrarse a sus familias. Son los obreros de base los que exigen la liquidación total en medio de la lucha, no de su derrota, eso tiene que ser explicado.

Han manifestado los obreros que no están pidiendo un regalo ni una limosna, sino que están defendiendo sus beneficios sociales, que no son otra cosa que la acumulación de la parte del salario que los empresarios han ido reteniendo a lo largo del tiempo. La propia legislación burguesa ha tenido en cuenta este hecho: autoriza la liquidación total y la recontractación bajo determinadas circunstancias y a fin de poner a salvo los beneficios sociales. En estos antecedentes se basó la reiterada propuesta porista de liquidación total —teniendo en cuenta determinado nivel de indemnización y simultánea recontractación; se buscaba defender no sólo la fuente de trabajo, sino también el salario acumulado en manos del empleador.

La tesis en sentido de que ese planteamiento importa únicamente la destrucción de la COMIBOL y que en esta medida coincidiría con los planteamientos gubernamentales, es equivocada, parcial y malintencionada. No se quiere ver -y los reformistas y colaboracionistas se niegan a analizar atentamente este proceso porque le tienen miedo- que en este planteamiento permanece latente la tendencia instintiva de las masas hacia la destrucción del poder y de la propiedad burgueses. Sería pedirles mucho que observen cómo se van desarrollando en las entrañas de una actitud aparentemente suicida -así ha sido calificada por el gobierno y también por sus colaboradores en el campo obrero y publicitario- los gérmenes de la actuación de los explotados en el futuro inmediato.

Una parte de los obreros abandonarán el trabajo por razones que colocan en primer plano los intereses personales -el sindicato se ha debilitado y no es capaz por el momento de arrastrarlos detrás de objetivos clasistas-: cansancio por enfermedad o vejez, atracción de la sayaña en el agro, esperanza de encontrar una ocupación mejor, etc; sin embargo, quedará otra parte en las minas, particularmente los más jóvenes o los escaldados por el ejemplo de los ya retirados que deambulan hambrientos y pidiendo limosna por las calles de las ciudades. Esto obliga a no plantear únicamente la liquidación de parte del personal, sino a combinar esta demanda con el mejoramiento de los salarios, de las pulperías y de las condiciones de trabajo -en primer término impedir la paralización de determinados parajes, el desmantelamiento de las instalaciones, la provisión de herramientas y otros implementos-,etc.

Hasta ahora se han ocultado los impulsos que se agitan detrás del pedido de liquidación

total. Reiteramos que al obrero está seguro que está luchando por la preservación de su salario, por no perderlo, se puede decir que está preocupado de poner a salvo su presente. Sin embargo, esos mismos obreros no dicen simplemente abandonamos las minas y no nos importa lo que sucederá con ellas; contrariamente, se ha afirmado la certidumbre de que son de ellos y al verse alejados de los socavones no quieren dejarlos simple y llanamente, sino destruirlos, para afirmar ahí su propiedad sobre las montañas. Es frecuente escuchar el deseo de laurear los socavones, ahogarlos, o llevarse las máquinas. Seguramente piensan que es el momento de destruir lo que es de ellos para que ningún advenedizo se aproveche de las minas que durante muchos años y sacrificadamente abrieron y habilitaron. Se tiene la impresión de que hubiésemos retrocedido a la época de los destructores de máquinas, pero no se trata precisamente de eso. Los empresarios cierran algunos parajes como reserva, evitando que nadie los toque en espera del cumplimiento de sus propios planes. Parecería que los mineros, obligados momentáneamente -sobre todo los que son proletarios generación tras generación- a abandonar sus tradicionales lugares de trabajo, quisieran conservarlos en reserva; por eso abrigan la idea de cegar las minas de la manera más eficaz: tornándolas momentáneamente inexplotables por extraños. Puede ser que los planes ideados en medio de la desesperación no sean eficaces, pero este es otro problema. Es curioso que los políticos y politiqueros del más diverso matiz no se tomen la molestia de detenerse ante todo esto, para ellos simplemente no existe. Los planes encaminados a inutilizar las minas no se vienen fraguando reservadamente, sino que son expuestos a grito pelado. El extremado subjetivismo se empeña en cerrar los ojos frente a la realidad, partiendo del equivoco de que así -de manera tan arbitraria- elimina el peligro de la ocupación de las minas, de la misma revolución.

La especie de que los trabajadores abandonan las minas es una conclusión simplista; lo que hacen es subrayar su condición de propietarios de las empresas de la COMIBOL. La demanda de liquidación total se convierte en una forma de lucha y no es sinónimo de abandono del combate. Lo menos que puede decirse es que esas tendencias, que en las capas más profundas de las masas pugnan por incorporarse, en el momento en que la conciencia de éstas dé un nuevo salto hacia adelante pueden orientarse hacia la recuperación de las minas, que no sería más que la maduración de algo que ya existe en germen dentro del proceso que vivimos.

De manera mecánica, los burócratas en decadencia y los grupos políticos que los sustentan, se limitan a señalar que la lucha por el mejoramiento del monto de lo que viene llamándose beneficio extra-legal busca facilitar los planes del gobierno; sin embargo, los hechos que hasta el momento han tenido lugar demuestran que el pedido crea un agudo problema -según los ministros insoluble-, desde el momento que el gobierno no dispone de más de 150 millones de dólares para satisfacerlo. El descomunal conflicto ya planteado motivará una profunda movilización de masas -tal vez bajo la forma de éxodo, de ayuno voluntario, etc, como se ha adelantado en algunos distritos-, que para vencer el obstáculo que le oponga el gobierno tendrá que introducir modificaciones en las formas de lucha y en las propias exigencias hechas en el primer momento. Es en estas condiciones -descartamos una nueva traición de los dirigentes, que necesariamente tendrán que tener presente la lección de la huelga de hambre- que las tendencias larvarias hacia la afirmación de la propiedad de los trabajadores sobre

las minas pueden exteriorizarse como ocupación física de las empresas. El deber del político consiste en potenciar las tendencias que se agitan en el seno de las masas y una forma de hacerlo consiste en unir la lucha del momento con la posible proyección inmediata de aquellas tendencias.

Hay que añadir que es absurdo el planteamiento en sentido de que el retiro de los obreros de las minas importa nada menos que la destrucción física de la clase revolucionaria. La conciencia de clase se concentró en la vanguardia organizada en partido político. Si se diese el caso del despido de todo el proletariado, éste pasaría a las filas del ejército industrial de reserva, en espera de la reactivación de la economía. La conciencia de clase no desaparecerá con la paralización de las empresas, sino que esa conciencia seguirá señalando la lucha de los oprimidos a través del partido revolucionario.

Tampoco debe olvidarse que los retiros masivos han sido planteados por otros sectores como una forma de lucha para lograr el mejoramiento de las remuneraciones. Los trabajadores en salud presentaron sus renuncias colectivas en varios distritos -en Cochabamba el número alcanzó a 1.200- y sirvió para potenciar la huelga general. Se ha logrado la nivelación de sueldos con los que rigen en la CNSS desde 1987.

Nos encontramos frente a un descomunal sacudimiento social que alcanza a todo el país; las bases se incorporan a la lucha y amenazan con barrer a la burocracia en todos los escalones -la COB no ha podido reunir un ampliado por falta de quórum-, buscan afanosamente otros objetivos y canales diferentes a los tradicionales, es notable el repudio de los activistas de base al diálogo y su predisposición de usar a fondo la acción directa. Los observadores tienen la impresión de que el movimiento obrero y popular carece de dirección, tan acostumbrados estuvieron a observar la poses y movimientos de los burócratas exhibicionistas, que no aceptan que los militantes de base y dirigentes medios reconocidos puedan convertirse en ejecutores de las decisiones de las bases. En este ambiente las ideas revolucionarias lanzadas de no importa qué punto y a veces de manera anónima, se convierten de inmediato en polos aglutinantes de los explotados. De esta manera surge la nueva dirección y la clase dominante y sus puntales no ocultan su tremendo miedo frente a este proceso renovador y de reorientación radical de los trabajadores. La revolución marcha pulverizando los prejuicios y todo lo viejo.

e)

El paso de la situación pre-revolucionaria a una puramente revolucionaria supone la agudización de la lucha de clases. Estamos viviendo esta etapa desde que se inició la lucha directa por la defensa de la Corporación Minera de Bolivia. Las masas se están batiendo en las calles -buscando imponer de manera autoritaria sus exigencias- por bastante tiempo, a través de avances y retrocesos. La amplitud de la movilización y su persistencia expresan -a su modo- las sorprendentes dimensiones de los problemas en juego. La traición de la huelga de hambre no se ha trocado en derrote, sino que ha radicalizado aún más a los explotados y les ha impulsado a barrer a la burocracia, uno de los acontecimientos más remarcables en la historia del sindicalismo, y a plantear de nuevo las demandas ya hechas con anterioridad. Tenemos que concluir que avanzamos en el camino que conduce a una situación revolucionaria, que, en

su momento, puede o no convertirse en insurrección. Nadie puede descartar la posibilidad de una derrota sangrienta de la actual movilización, que de producirse iniciaría un período contrarrevolucionario.

La lucha contra la burocracia se convierte en un aspecto fundamental del proceso revolucionario. Como no podía ser de otra manera, el antiburocratismo ha concluido concentrando los problemas emergentes de la crisis de la minería. Están equivocados los que sostienen que por este camino se divide o debilita a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia; contrariamente, se ha dado un paso importante en el camino de su fortalecimiento. La burocracia sindical es uno de los canales que utiliza la clase dominante para penetrar en el campo obrero, en su empeño de dominar ideológicamente a los explotados.

En resumen, el antiburocratismo es uno de los aspectos de la liberación de la clase obrera del control y opresión por parte de la burguesía.

III

La marcha minera por la vida

a)

Desde antes de la llamada "Marcha por la vida" los trabajadores mineros ya estaban luchando por la defensa de la Corporación Minera de Bolivia como empresa estatizada y como fuente de trabajo, frente a la política antiestatizante y entreguista contenida en el Decreto No. 21060, es tanto como decir que se enfrentaban contra la política global del Movimiento Nacionalista Revolucionario en el poder -que no tardó en aliarse con la fascista ADN-, contra la burguesía nativa que solamente atinaba a abandonarse en brazos del imperialismo. La lucha de clases se iba concretizando y polarizando aceleradamente. En este proceso la marcha de los mineros adquiere importancia, potencia y radicaliza la movilización popular.

Ya era evidente la rápida incorporación de amplias capas de las masas -particularmente de las mujeres y de los niños- a la lucha, impulsados por su instinto de clase; de aquí arranca el potenciamiento de la acción directa, la desconfianza y finalmente la repulsa al método del interminable diálogo y de la componenda con el gobierno. Para los activistas de base las conversaciones con las autoridades equivalía a dar largas a los problemas para nunca solucionarlos, para concluir en la frustración. Aquí ya se encontraba en germen el antiburocratismo de las masas, que más tarde adquirirá contornos punzantes, y cuando los dirigentes aparecieron como sinónimo de traición. Así se decantaba una larga tradición de lucha y de derrotas de los explotados bolivianos.

La política del gobierno fije agravando aceleradamente el problema de la minería y de las mismas poblaciones asentadas alrededor de las minas, que fue respondida por una movilización del conjunto de los habitantes -incluidos los campesinos-, de esas regiones. La premisa en sentido de que la minería es un problema nacional se concretizó rápidamente. Si hasta entonces el movimiento sindical y político de los mineros presionaba sobre las poblaciones, ahora éstas reaccionaban vigorosamente sobre las fuerzas sindicalizadas. No tardó en darse el ejemplo de parte de la nación oprimida combatiendo bajo la gran orientación política de la clase obrera.

La marcha -en Siglo XX fue bautizada como "La marcha por la vida"- fue una forma de la acción directa e importó que los explotados decidieron ocupar los caminos y las calles de las ciudades, buscando imponer sus reivindicaciones. Se incorpora a las grandes operaciones que ejecutan las masas contra el orden social establecido y sus leyes. Su uso exitoso depende -ya hemos indicado- de las condiciones políticas imperantes. En el caso de la marcha de los mineros se tornó exitosa, aglutinó la atención de todo el país, puso en pie y movilizó a amplios sectores sociales: campesinos, clase media y hasta algunas capas burguesas declararon su voluntad de socorrer a los mineros que ejecutaban la espectacular operación.

El ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia de Oruro aprobó la marcha y lo hizo cediendo a la presión de las bases sindicales, que van a estar

presentes en los acontecimientos posteriores. Se tuvo que vencer la resistencia de la dirigencia sindical, particularmente del grupo encabezado por Simón Reyes (PCB), que sostuvo que las marchas no sirven y que -citó el caso del Perú- los obreros derrotados concluyen pidiendo limosna en las calles de las ciudades. En Calamarca el dirigente stalinista volvió a repetir que no fue partidario de la marcha. Los objetivos que se enarbolaron fueron los de la defensa de la COMIBOL como empresa estatizada y como fuente de trabajo -vale decir, repudio a la política general y económica del bloque adenomovimientista- y los referentes a arrancar al gobierno una respuesta sobre la forma de rehabilitar a las minas nacionalizadas. La tendencia al retiro voluntario estaba ya presente -fue impulsada por el Decreto 21060-, pero todavía no cobró descomunales dimensiones ni opacó a las otras.

Obreros de varios distritos se reunieron en Oruro y la marcha hacia La Paz, protagonizada por alrededor de 6.000 personas, comenzó el 22 de agosto. Una fracción desprendida desde Potosí, en la que estaban integrados mineros del Sud, tuvo que vencer muchos obstáculos antes de poder alcanzar a la columna principal. La población de Oruro se apostó a lo largo de las calles para entregar a los trabajadores su aporte; se convirtió en la fuente nutricia de mayor número de caminantes, pues hasta sus autoridades se lanzaron al encuentro de la impresionante caravana. En el momento cenital, seguramente alrededor de 10.000 personas recorrían la carretera. Las bases sindicales ingresaron a una mayor radicalización y -como siempre ocurre en períodos semejantes, por otra parte- fueron cobrando la certeza de que podían hacer todo y vencer los obstáculos, por muy grandes que fueran éstos. Virtualmente casi toda la población encontró en la huelga de hambre el canal para exteriorizar su repulsa al oficialismo, que se vio totalmente aislado. Nadie se acordó que el MNR amontonó en las últimas elecciones una gran cantidad de sufragios, pues esa victoria fue suplantada y opacada por una impopularidad acelerada. En este momento acentuó -aún más- sus contornos de dictadura policiaco-militar. El inmediato éxito de la marcha puso en evidencia la acelerada agudización de la lucha de clases.

Las masas perseguían objetivos diferentes y hasta opuestos a los de los dirigentes burocratizados, antagonismo que encontrará su máxima expresión en la huelga de hambre. Los mineros pugnaban por llegar a la sede del gobierno para imponer sus demandas a través de su fuerza y organización; contrariamente, los dirigentes no ocultaban su propósito único de usar la marcha como fuerza de presión para obligar al gobierno a entablar un diálogo, en la certidumbre de que de él saldría la solución de la crisis de la minería. Los que estaban cubiertos de ampollas de tanto caminar, denunciaron como algo sospechoso el retardo de la marcha por voluntad de la burocracia, ésta sabía que la marcha debía mantenerse hasta lograr la venia del Ejército para el comienzo del diálogo.

b)

En los hechos fue sellada la alianza obrero-campesina, una de las referencias que nos permite orientarnos acerca de la evolución de la situación política, en la atrasada Bolivia el basamento fundamental de la estrategia del proletariado radicó en su alianza con el campesinado, pues será ésta la que le permitirá llegar al poder. A lo largo del

camino, los hombres y las mujeres del agro tomaron a su cargo la tarea de alimentar y dar hospedaje a los que de manera tan abierta e impactante luchaban contra el mal gobierno que no cejaba en su propósito de imponerles nuevos tributos, un látigo que la clase dominante no dejó de empuñar en las últimas décadas, por el gorila general René Barrientos y otros exponentes de la burguesía. No hay que olvidar que el que ofrendó su vida en la quebrada de Arque en homenaje al pacto Militar-campesino, considerado por él como una de sus mayores creaciones políticas, que supo utilizarlo como cebo de campaña colocado a la mayoría nacional. El pacto militar-campesino, -al que curiosamente también se refirió el general Torres- fue acuñado por los usurpadores del poder como un recurso que les podía permitir arrastrar a los hombres de la gleba política detrás de sí.

Grupos de campesinos -usamos el término como sinónimo de pequeños productores individuales del agro- se sumaron a la marcha y formalmente sellaron la alianza obrero-campesina en la concentración de Patacamaya. Los explotados de la ciudad y del campo se comprometían a luchar de manera coordinada y unida contra la política antipopular liberaloide del MNR; más concretamente, los campesinos encontraron los mineros a sus portavoces en su enconada lucha -todo hace suponer que en el futuro desembocará en la victoria- contra los nuevos ideados en el Decreto 21060. Dicho de otra manera, los indios se unieron a la vanguardia de la clase obrera impulsados por gigantescos intereses materiales. Se tuvo la impresión de que se incorporaron desde sus diminutas parcelas para repudiar al personaje y el partido que en 1952 se opusieron al reparto negro -las masas instintivamente buscaban acabar con todos los gamonales y lograr que la tierra labrantía pasase a manos de los siervos y de los hasta entonces despojados de su propiedad-, les obligaron "legalmente" a retroceder a las conquistas que habían impuesto con las armas en las manos, que contribuyeron a detener la reforma agraria de corte burgués en el minifundio, causa de la miseria campesina. Estas son las razones por las que los hombres del agro siguen permaneciendo como aliados naturales de la clase obrera, como la poderosa fuerza que permitirá materializar la revolución proletaria; ese profundo significado adquiere el solemne y público apretón de manos entre la clase revolucionaria de las minas y la nación-clase más, oprimida y discriminada del campo. La concentración de Patacamaya probó en los hechos que los sectores fundamentales de la sociedad comenzaron a desplazarse hacia el polo proletario, la más grande amenaza para la estabilidad del orden social imperante.

Los campesinos, decidieron apuntalar a sus hermanos mineros no solamente sumándose a la marcha, sino recurriendo a su peculiar método de lucha, el bloqueo de caminos, que tuvo lugar de manera intermitente y en muchos puntos del país, neutralizado por el uso de la violencia por parte de las tropas armadas.

El gobierno adeno-movimientista sabe perfectamente que la alineación de los campesinos junto a la clase obrera constituye para él y para todo el sistema un gravísimo peligro. En el pasado el movimientismo pretendió, utilizando el señuelo de la parcelación de las haciendas, volcar los sindicatos del agro contra los mineros, particularmente. Para el éxito de este siniestro plan faltó que los campesinos se convirtiesen en una capa social poderosamente rica. Los hambrientos necesariamente tienen que rebelarse contra el estado de cosas imperante. El agro tendrá que seguir luchando contra los

impuestos, por la conquista de toda la tierra labrantía -la agricultura horizontal en condiciones tecnológicas precarias exige grandes superficies para poder lograr cosechas que satisfagan las necesidades del autoconsumo-, por la solución de problemas del día que tienen relación con la existencia misma de la familia. La profundización de la lucha puede permitir que las grandes nacionalidades oprimidas se orienten hacia la autodeterminación y en este propósito tendrán en la clase obrera a su mejor apoyo y guía. El Estado obrero no puede basarse en la opresión de pueblos y naciones.

Los pobladores de algunas regiones agrarias gravitan casi íntegramente en las minas, como es el caso del Norte de Potosí; para ellos la crisis de la COMIBOL -presentada por el mal gobierno como crisis sin solución- es su propio problema, de vida o muerte, Muchas comunidades ya han expresado la exigencia de que el gobierno construya caminos a otros centros urbanos, a fin de poder encontrar nuevos mercados para sus productos.

Los campesinos continúan en la trinchera y su decisión de seguir batallando junto a la clase revolucionaria de las ciudades no ha sufrido atenuantes de ninguna especie. Esta es una garantía para la victoria revolucionaria. El oficialismo, por esto mismo, se ha lanzado de lleno a dividir a las organizaciones sindicales del agro, habiendo sido hasta el momento rechazado en sus propósitos reaccionarios.

c)

La descomunal agitación social del mes de agosto fue un virtual levantamiento de ciudades y poblaciones en su integridad. A la lucha minera se sumó la protagonizada por los comités cívicos y los grandes cabildos. El gran problema nacional de la minería alcanzó a englobar los regionales. El Estado boliviano no solamente carece de soberanía, sino que tampoco ha logrado una verdadera unidad: el localismo y el tremendo rezagamiento -que no encuentra posibilidades de ser superado en el marco de un capitalismo en decadencia- se traducen en las tendencias regionalistas y federalistas, que actúan como fuerzas centrífugas. La descentralización administrativa no logrará superar este estado de cosas, la solución se encuentra en la posibilidad de salir del atraso y esto no puede asegurar el gobierno burgués en plena desintegración.

En la permanente agitación regional hay que distinguir el poderoso impulso de las masas, que casi siempre encuentran canales de expresión de su descontento en las demandas localistas, de la orientación seguida por las direcciones cívicas. Las capas mayoritarias de las ciudades y poblaciones se identifican con el proletariado en sus impulsos y objetivos, se mueven motorizadas por una gran dosis instintiva. De una manera general, sus direcciones parten del respeto al régimen de la gran propiedad privada y el legalismo, aunque casi siempre se ven impulsadas a recurrir a la acción directa. Más que en otras organizaciones, el impulso impreso por las masas puede llevar a las direcciones a posiciones insospechadas y casi siempre rechazadas inicialmente.

Un acuerdo de la FSTMB colocó a las direcciones de los comités cívicos en medio de una descomunal lucha antigubernamental, buscando evitar el cierre de las minas, un problema de enorme importancia para la existencia de los departamentos de Oruro y Potosí. Los comités de huelga mixtos que se organizaron demandaban del gobierno la

adopción de un plan de rehabilitación de la COMIBOL partiendo del proyecto presentado por la dirección sindical minera. Dirigentes cívicos y sindicales estaban hermanados en el propósito de no ir más lejos y de lograr la salvación de las grandes concentraciones humanas en el marco de las leyes.

Los comités cívicos se sumaron a las huelgas y a veces fueron ellos los que las precipitaron y apuntalaron activamente la marcha de los mineros, pero ya estuvieron ausentes en la huelga de hambre. Después de conocerse los resultados del ampliado minero de La Paz, los dirigentes cívicos no dubitaron en salir en defensa de los burócratas defenestrados por voluntad de las bases. En la ocasión expresaron que correspondía evitar la insurgencia de tendencias radicales o anarquizantes y no ocultaron su enojo por el marginamiento de la vieja dirección. Los dirigentes cívicos se mostraron de cuerpo entero. La lucha revolucionaria acaudillada por la clase obrera necesariamente tiene que arrastrar a los sectores mayoritarios de las ciudades y poblaciones, es decir, a la mayoría de la clase media, y lo hará violentando la voluntad conservadora de las direcciones de los comités cívicos, tan estrechamente ligados a los sectores empresariales.

d)

Las otras poblaciones, particularmente la ciudad de La Paz -importante por su gran peso económico y por ser sede del gobierno- se movilizaron en apoyo de los mineros que se convirtieron en dueños del tramo caminero más importante. Estamos incluyendo a El Alto en esta consideración, cuya mayor radicalización está determinada por su composición social obrera, campesina y de clase media empobrecida. Partieron piquetes para sumarse físicamente a la marcha. Diferentes instituciones ligadas al movimiento obrero -COB, Federaciones de Maestros, Universitaria Local, organizaciones barriales y populares- procedieron al acopio de alimentos, vituallas, etc, para recibir y ayudar materialmente a los trabajadores de las minas. Los más activos fueron los maestros, los universitarios y estudiantes.

La mayoría nacional se movilizó alrededor de los mineros, en cierta medida obedeciendo a su dirección política. Este hecho constituye -y así se incorpora a la conciencia de clase- un remarcable avance en el proceso revolucionario. Hay que recordar este ejemplo a todos los ultristas que sostienen el extremo de la inconveniencia de la alianza del proletariado con las otras clases sociales y que en caso de producirse se convierte en un frente popular al servicio de la burguesía. La experiencia que vivimos y también la histórica, demuestran que la revolución será protagonizada por toda la nación oprimida (varias clases sociales) acaudillada por el proletariado, o aquella no tendrá lugar. El problema radica en lograr que el proletariado se convierta en la dirección política nacional. Los ejemplos sobre este último aspecto menudean y a ellos hay que agregar lo aprendido durante la marcha minera.

Para la mayoría de los bolivianos la llegada de los mineros a La Paz tenía el significado de una remarcable victoria sobre el gobierno antinacional. El sentimiento de solidaridad que se apoderó de la población apenas sí escondía la actitud de rechazo a las autoridades y de lucha contra ellas, consideradas como causantes de todo el malestar económico y social.

Se tiene que poner de relieve la decisiva participación de las mujeres y hasta de los niños en la marcha y en los movimientos de las ciudades. En la columna de caminantes, las mujeres con sus hijos ocuparon la vanguardia y se distinguieron por su sacrificio y su radicalismo. En las ciudades el movimiento de solidaridad estuvo generalmente timoneado por las mujeres.

Corresponde recalcar nuevamente que la revolución contará con la decisiva participación de las mujeres, particularmente de las proletarias, de las campesinas y de las pertenecientes a la clase media empobrecida. Un sacudimiento social de descomunales dimensiones también arrastrará a la vorágine a los adolescentes. Los últimos conflictos sociales confirman lo que sostenemos.

En algunas oportunidades la población de las ciudades oponía su miedo a la posible ocupación por los mineros, que a su paso hacen explosionar cachorros de dinamita, lo que probaba el distanciamiento entre los intereses y objetivos de la clase media y de la vanguardia del proletariado. Esta vez la situación fue otra: los paceños esperaban con alborozo la llegada de los trabajadores, esperanzados de que al fin sería castigado el régimen movimientista por todas las fechorías que viene cometiendo.

e)

La jerarquía eclesiástica -es preciso no confundirla con el clero en su conjunto- apareció con su inconfundible paternalismo, como mediadora colocada por encima de las discrepancias de los grupos de mortales y del propio Estado, siempre como amigable componedora, repudiando la violencia venga de donde venga. No puede darse la lucha de clases entre los hijos de Dios y corresponde superar todas las discrepancias en busca de entendimiento. Todo esto no es más que apariencia, el barniz que coloca la propaganda sobre una punzante realidad: la jerarquía eclesiástica es uno de los pilares de sustentación del régimen social que se levanta sobre la gran propiedad privada burguesa de los medios de producción. Olea y santifica la explotación del obrero por el capitalista y contribuye, de manera decisiva, a mantener al indio en la masedumbre, a fin de que sea más fácilmente sojuzgado. Toda vez que interviene como mediadora y amigable componedora, se da modos para amañar los pleitos en favor de los poderosos. Esta conducta turbia no es casual: la iglesia es una gran potencia económica y conservadora, pese a la "teología de la liberación"; al defender a los gobiernos burgueses está defendiendo sus propios intereses terrenales, que son los que cuentan en definitiva, inclusive para el clero.

Los obispos y sus seguidores acompañaron a la columna minera, seguros de que eran prenda de garantía de la paz y autoridad capaz de impedir excesos de cualquier naturaleza. Lo que tiene que comprenderse es que durante la marcha, la huelga de hambre y la suscripción del convenio-traición, la alta jerarquía eclesiástica agotó todos sus recursos -que son muchos- para desarmar a los obreros, para privarles de su belicosidad -expresión del poderío de los explotados organizados-, en fin, para someterlos a la ley. Esta es una de las mejores formas -se realiza al margen de la violencia- para poner a salvo al Estado burgués. La Iglesia niega la lucha de clases, pero toma parte activa en ella y ocupa la misma trinchera de los explotadores. Rechaza

el carácter de mercancía de la fuerza de trabajo -con una manifiesta mala fe dice que el marxismo reduce al obrero a la condición de objeto venal-, pero asegura que su venta y explotación se haga de manera santa, 'legal' sin convulsiones. Sin poder escapar a la esencia del capitalismo, convierte en mercancía todo lo que toca, inclusive sus bendiciones y oraciones.

La clase revolucionaria, particularmente en los momentos de tensión de la lucha de clases, gana para su causa a los mejores elementos de las otras clases sociales, el clero no es extraño a este proceso. Los sacerdotes que se identifican con los trabajadores tienen que luchar como éstos; empujados a la violencia que emerge de la lucha de clases no tienen más remedio que usar la violencia revolucionaria y la acción directa, el método fundamental de lucha de los explotados. Durante la marcha y la huelga de hambre emergió imponente la figura del cura Juan Bernardo, símbolo del clero que quiere luchar por la liberación de los explotados, inmerso en las masas, sin ninguna pretensión de dirigirlas, de imponerles una ideología extraña. Esos luchadores no son ya los colonizadores, los conquistadores, los catequistas de indios salvajes, sino combatientes que actúan codo a codo con los oprimidos.

No es casual que los burócratas más corrompidos -para quienes los ingentes recursos que maneja la iglesia constituyen arrebatadora tentación- se presenten como creyentes de una nueva fe: la identidad de fines o acaso de ideología entre marxismo y cristianismo. Los burócratas corruptos representarían el marxismo domesticado y los curas todopoderosos el cristiano "socialista y revolucionario". Estas posturas no tienen más finalidad que la de encubrir bellaquerías inconfesables. No solamente se trata de que el materialismo dialéctico y el idealismo son posiciones extremas y antagónicas, sino que el objetivo de una sociedad sin clases no conjuga con el sometimiento conformista al Estado de la clase dominante.

La patronal y su Estado saben perfectamente que la burocracia sindical -ha sustituido la defensa de los intereses de los trabajadores con la defensa de los que son propios de los ricos, de los capitalistas- constituye uno de sus mejores instrumentos para poner a salvo a la sociedad actual. La jerarquía eclesiástica comparte este criterio y actúa en consecuencia. Luego de que el convenio-traición fue rechazado mayoritariamente por los trabajadores del subsuelo, el obispo de Oruro se apresuró en manifestar que ese error podía acarrear muchas injusticias y -asumiendo igual actitud que la del gobierno- que la dirección provisoria solamente podía ocasionar perjuicios. De entrada desahució toda posibilidad de diálogo con mediación de la jerarquía, dadas las condiciones imperantes. ¿Acaso los obispos no están siempre dispuestos o sacrificarse en servicio de las ovejas descarriadas? Esa inconducta muestra desnudo al clero y ya no puede haber la menor duda acerca del lado en el que se ha ubicado.

Los medios de comunicación social controlados -de manera directa o no- por la alta jerarquía clerical han jugado y juegan el mismo papel. Los obreros y toda la nación oprimida tienen que luchar no sólo contra el capitalismo-imperialismo, sino también contra la iglesia; de esta última tienen que emanciparse ideológicamente y analizar críticamente las raíces de su inconducta, para evitar seguir siendo maniatados y entregados a los explotadores de manera tan santa.

f)

El Estado utiliza la violencia y también la ley, para lograr que la explotación de los obreros tenga lugar en un ambiente de paz social. La tregua, la paz, la concertación sociales, son recursos que utiliza la clase dominante para lograr la misma finalidad. A lo largo del conflicto minero e inmediatamente después de suscrito el convenio-traición, los portavoces de la clase dominante y de la jerarquía eclesiástica no se cansaron de predicar acerca de la necesidad de sellar un pacto de paz social. La experiencia vivida nos enseña que cuando fracasan esas tramitaciones, el Estado impone la tan ansiada paz social a palos, resultado del aplastamiento de las movilizaciones de masas.

La izquierda proburguesa, la burocracia y todos los seguidores de la clase dominante, sostienen que para evitar los efectos terribles de la represión estatal debe impedirse que los explotados ganen las calles y recurran a la acción directa, a la violencia. La pasividad sería la respuesta a la represión. Nuestra propia historia enseña que hay una sola manera de neutralizar a las medidas represivas y a los organismos llamados a ejecutarlas: ampliar y profundizar la movilización de masas, esto cuando existen condiciones para llevarla a cabo. Cuando más se amplifica la movilización, los organismos estatales resultan insuficientes para acallar a gran parte de la población.

Durante la marcha de los mineros, las autoridades usaron las amenazas y mostraron a las tropas armadas en los caminos y en las calles de las ciudades, buscando evitar el movimiento y su masificación mediante el miedo. Cuando este movimiento creció desmedidamente el gobierno cambió de actitud, dijo que los mineros podían llegar a La Paz y se presentó como protector de la marcha. El equipo ministerial no pudo conservar su unidad frente al problema de cómo responder a la amenaza obrera que se proyectaba sobre la sede de gobierno. Los duros timoneados por el veleidoso Bedregal exigían la inmediata adopción del estado de sitio, a fin de contener a los mineros con ayuda de la violencia, pero tardaron en imponerse. Sobre todo con fines propagandísticos, el régimen movimientista buscaba aparecer como amigo de los trabajadores. Esperaba que su actitud tolerante debilitase el movimiento y que el cansancio concluyese doblegando a los belicosos trabajadores. Las cosas sucedieron de manera inversa: a medida que pasaba el tiempo la lucha se fortalecía y adquiría mayor dureza. Los organismos represivos no quisieron correr el albur de tener que enfrentarse en las calles de La Paz con los mineros enfurecidos y apoyados por casi toda la población; por eso decidieron hacer retroceder a los caminantes un poco antes de que divisasen la ceja de El Alto. Calamarca y San Antonio fueron elegidos como puntos en los que debían enfrentarse los carros blindados y los soldados con los trabajadores.

Cuando los mineros caminaron durante cinco días y permanecían detenidos por sus dirigentes a pocos kilómetros de su meta, el gobierno dictó el estado de sitio el 27 de agosto por la noche. La represión estuvo dirigida preferentemente a los dirigentes y activistas sindicales más que a los políticos, algunos de éstos fueron apresados porque deambulaban despreocupados por las calles. Inmediatamente los detenidos fueron enviados al Noroeste en calidad de confinados. Este tipo de redadas siempre tuvieron dos objetivos: contener la movilización y luego apartar a las masas de sus objetivos iniciales e impulsarlas a luchar por la libertad de sus dirigentes y compañeros.

Los trabajadores amanecieron en Calamarca y San Antonio totalmente rodeados por tanquetas y soldados armados. Comenzó la poderosa presión para que retornasen a las minas. Mientras los mineros -y particularmente las mujeres- pugnaban por seguir avanzando, los burócratas habían concluido un acuerdo que estipulaba el retroceso de los caminantes a cambio únicamente de que ninguno de los participantes en la marcha y menos los dirigentes serían apresados ni perseguidos. La marcha fue poderosa, presionaba vigorosamente sobre el gobierno y tenía la posibilidad de arrancarle importantes concesiones. Los burócratas la vendieron e cambio de casi nada y a espaldas de los protagonistas. No hubo asamblea ni discusiones entre los trabajadores para la adopción de medidas en respuesta al estado de sitio. El acuerdo burocracia-Ministerio de Gobierno sembró la desorientación y el descontento entre los trabajadores. La masa hostilizó a los malos dirigentes y las mujeres los trataron muy mal.

“Masas” -No. 1046 de 27 de septiembre- publicó la transcripción de una charla sostenida por tres burócratas -uno de ellos era Reyes- con el subsecretario de gobierno Guido Meruvia, en la que estos señores se distribuyeron los papeles para lograr algunas horas después el repliegue de los mineros. Meruvia pidió el apoyo a los dirigentes y también a su persona.

El 29 de agosto comenzó el retorno de los mineros a sus lugares de trabajo. La crónica de “Presencia”:

“Los miles de trabajadores mineros... decidieron emprender el retorno a sus distritos. La información fue comunicada por los propios dirigentes de los trabajadores mineros al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Julio Terrazas y los obispos que le acompañaron en la visita que cumplió ayer... a San Antonio Calamarca... Monseñor Terrazas informó que las autoridades de gobierno así como los comandantes de las unidades que efectuaron el cerco militar a esas localidades señalaron que no efectuarán otras acciones”.

Se pretendió justificar el estado de sitio con el argumento de que los elementos políticos extremistas que se sumaron a la marcha la desvirtuaron, convirtiéndola en una seria amenaza para la seguridad del gobierno.

Efectivamente, dirigentes de la izquierda pro burguesa -entre ellos algunos parlamentarios- se trasladaron hasta Calamarca para encabezar la marcha y demostrar ante los paceños su gran popularidad entre el proletariado. Entre los osados que cometieron semejante usurpación se contaba hasta un representante de FSB. Esos “izquierdistas” -aprovechadores y oportunistas- seguramente estaban identificados con los trajines y metas de la burocracia y, por esto mismo, totalmente alejados del pensamiento y de las metas de los trabajadores. En Calamarca fueron hostilizados y una asamblea de Siglo XX-Catavi mostró su extrañeza por esa ingerencia.

El gobierno se refirió a ellos simplemente como a un pretexto para justificar su medida de fuerza. Sabemos que los parlamentarios no tienen fuerza ni capacidad para contribuir en alguna forma a la transformación del estado de cosas imperante. Lo evidente es que los oportunistas no pudieron sacar ventaja de su periplo a Calamarca, la oportunidad

servió para demostrar que los caudillos de las masas se forjan en la lucha brava de las calles y no llegan traídos por un helicóptero de no se sabe dónde.

g)

Hemos vivido un profundo sacudimiento social que empujó a las capas más profundas de las masas a un primer plano y el hecho ha dejado importantes enseñanzas. Esas capas nuevas, vírgenes en política -y a veces hasta en la actividad sindical-, vinieron impulsadas por su instinto y de un brinco se colocaron a la altura de la dirección y pugnaron por sobrepasarla. Fenómenos similares se observaron muchas veces. La acelerada y osada radicalización se convierte en una dura prueba para las direcciones políticas, que son tales en la medida en que señalan caminos que pueden permitir la superación del presente. Se observa con frecuencia que los dirigentes quieren, mimetizarse en el seno de la gran masa gris, a fin de no ser marginados; de esta manera pueden concluir disolviéndose en los grandes contingentes movilizados. Las masas acaban sin dirección y sin objetivos precisos, debido a que los diferentes contingentes que se suman traen sus propias aspiraciones.

Esto fue lo que precisamente sucedió durante la marcha de los mineros. La dirección política revolucionaria se disolvió en la masa y estuvieron ausentes las grandes y arrebatadoras ideas políticas capaces de arrastrar a los explotados a determinados objetivos. La pérdida de unidad estratégica se torna -tarde o temprano- en el flanco débil de una movilización. No sabemos si esta situación hubiera sido superada con la conquista de la ciudad de La Paz, no se puede descartar esa posibilidad porque los mineros se hubieran visto obligados a utilizar diversos recursos para vencer políticamente al gobierno.

Surge la pregunta: ¿qué hubieran hecho los mineros en la ciudad de La Paz? Parece que inicialmente el gobierno abrigaba la esperanza de que se hubiesen agotado después de algunas demostraciones callejeras. Cediendo al pedido de burócratas y jerarquía eclesiástica, podían haberse inclinado por la salida más cómoda e inofensiva: dialogar con los representantes de los mineros, camino que hubiera conducido a una nueva frustración.

Para imponer sus objetivos les quedaba pocas salidas: una huelga de hambre masiva, la ocupación de las minas o el derrocamiento del gobierno. La primera podía haber sido adoptada como la culminación de la marcha y acaso hubícara alcanzado a la misma altura que el ayuno voluntario posteriormente realizado en los socavones. Lo que aparece como menos probable es el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro, nos parece que para eso se habría tenido que pasar previamente por la ocupación de las minas, siempre que se la considere cualitativamente diferente a la cooperativización.

Es claro que en La Paz -que para los mineros era el símbolo de su victoria total- se habría producido una tensa discusión acerca del camino político que debían seguir los mineros, es entonces que hubiera vuelto a aflorar la dirección revolucionaria de las masas.

Como los mineros no llegaron a La Paz estas anotaciones deben ser consideradas como simples posibilidades.

IV

La huelga de hambre

a)

El primero de septiembre un piquete de mineros de la Sección Animas, encabezado por su delegado y dirigente porista Andrés Lora, ganó los socavones de Siglo XX para iniciar la huelga de hambre. El grupo contó inicialmente con pocos elementos, pero estaban seguros que este cambio de método de lucha arrinconaría al gobierno y podría arrancarle las reivindicaciones enarboladas a lo largo del conflicto minero. Conocidos luchadores revolucionarios se sumaron rápidamente al piquete y el día doce suscribieron una declaración pública más de una treintena. Fue -ni duda cabe- el grupo más homogéneo ideológicamente, más firme y más duro, como consecuencia de su convicción de que por ese camino podían lograr la victoria o bien -en caso necesario- cambiar sus demandas y métodos de lucha. Se desprendieron algunos para trasladarse a otros centros mineros y ciudades, esto porque se tenía la convicción de que la masificación del ayuno voluntario potenciaría al movimiento. Se sumaron a este piquete el sacerdote Juan Bernardo, la educadora Celia Suárez, el viejo revolucionario Pablo Rocha, etc.

La izquierda proburguesa especializada en descubrir todos los días derrotas y retrocesos del movimiento obrero -rasgo distintivo del centrismo entre el reformismo y la ultraizquierda- sostuvo que la retirada impuesta durante la "Marcha por la vida" constituía el fin de la movilización, debiendo concentrarse los esfuerzos en salvar parte de los efectivos y de ninguna manera en cuestionar al mal gobierno. Lo sensato era -según esa izquierda de "derecha"- empeñarse en salvar la mayor parte de los efectivos y no embarcarse en la aventura de nuevas movilizaciones. Actitud tan prudente y conformista chocaba con la realidad objetiva. La marcha no concluyó en una derrote, sino en una retirada ordenada, táctica adoptada por no haber podido vencer los obreros el obstáculo que se les opuso, no fue seguida por el desbande, sino que entroncó en otra forma de lucha, en la huelga de hambre. Ni duda cabe que la retirada fue un accidente, una maniobra táctica dentro del ascenso de masas. Es esto lo que no comprende la izquierda pro burguesa porque se lo impide su ubicación ideológica y sus intereses inmediatos: habilitarse para intentar ganar en futuras elecciones generales, a esto llaman alternativa de poder. Esa "izquierda". no quiere la revolución, la teme de manera mortal, busca puestos en el parlamento y en el gobierno con ayuda de la papeleta electoral. El cretinismo parlamentario se ha tornado estupidez política incurable.

La huelga de hambre fue desencadenada a espaldas de la alta dirección de la FSTMB, sin que hubiese mediado discusión o consulta entre ésta y las masas. La burocracia no reparó en la torpeza de declarar públicamente y con insistencia que la huelga había sido adoptada por su cuenta por las bases y que era de su exclusiva responsabilidad. Llegaron al extremo de no utilizarla directamente como arma contra el gobierno, tipificado como el enemigo principal por los trabajadores. De esto se deducen dos cosas: la contradicción entre la burocracia y las masas -éstas exteriorizaron su odio a los burócratas parásitos- había llegado a su extrema agudeza; la lucha antigubernamental de los trabajadores pasaba por la lucha contra la alta dirección sindical corrupta.

Los que participaron en la marcha se plegaron rápidamente al ayuno voluntario, lo que está probando que no hubo ninguna derrota, que las masas seguían ocupando las trincheras. Aceleradamente la huelga se trocó en masiva, nuevamente arrastró el apoyo de las poblaciones, se masificó venciendo las amenazas y la resistencia gubernamentales, la campaña en su contra de la burocracia -todavía a la cabeza de las organizaciones de trabajadores-, del oficialismo, de la jerarquía eclesiástica, etc. El rápido fortalecimiento de la huelga se debió a la presencia en los piquetes -cada día mayor- de los sindicalistas, de los universitarios, de las mujeres, etc. Cuando fueron miles los ayunadores y cuando se hizo evidente que ya nadie podría detener su mayor fortalecimiento, parte de la burocracia -la que se presenta como "patriota" y centrista- adoptó una hipócrita actitud dual: se sumó a la huelga, pero siguió combatiéndola subterráneamente. Esa "izquierda" temió a la impopularidad ocasionada por su conducta. Hay que añadir que la camarilla stalinista -PCB- mantuvo invariable su actitud opositora al ayuno voluntario.

b)

La huelga de hambre es considerada normalmente como una actitud pasiva y defensiva, utilizada por quienes son extremadamente débiles frente a la prepotencia estatal o patronal. Tantas veces se la a visto convertida en arma de elementos derrotados y víctimas de la desesperación. Con todo, es uno de los métodos de lucha en manos de los explotados. En Bolivia su uso es frecuente. Las características anotadas de ninguna manera agotan su análisis.

El ayuno desde los socavones se convirtió en ofensiva, en poderosa palanca de movilización popular. Cuando los huelguistas son millares en todo el país y cuando se extiende como reguero de pólvora, solamente los mecanicistas pueden concluir que se trata del arma que empuñan los débiles y los derrotados. Contrariamente, los explotados están demostrando todo su poderío y sus posibilidades a través de esa forma de lucha. No es la primera vez que sucede esto. El 28 de diciembre de 1977, cuatro mujeres mineras de Siglo XX -encabezadas por la porista Aurora Villarroel- desencadenaron una huelga de hambre en el Arzobispado de La Paz, que inmediatamente encendió un poderoso movimiento multitudinario y entroncó en una huelga de los trabajadores. Ese ayuno concluyó doblegando a la dictadura banzerista y obligándola a poner en vigencia las garantías constitucionales.

A veces el ayuno voluntario es utilizado para profundizar las movilizaciones, para potenciar los medios de presión sobre la patronal o sobre las autoridades. Tampoco es correcto sostener que invariablemente constituye el último recurso de las masas, porque -como se ha indicado- puede actuar como el detonante que desencadene imponentes movilizaciones de masas. Tiene diferentes proyecciones y puede inter-relacionarse con otras formas de lucha o bien trocarse en alguna de éstas. No debe considerarse como algo estático, dado de una vez por todas, sino en constante transformación.

La significación de la huelga de hambre, sus perspectivas, el que se plantee como método de lucha de las masas o como un recurso individual, depende del momento político en el que estalle: ascenso revolucionario o derrota de las masas.

Puede convenirse en escalón que generalice y potencie los primeros brotes de reanimación de la lucha de los explotados o bien marcar un hito en la dispersión caótica del ejército derrotado. En nuestra historia se conocen ejemplos de ambas modalidades.

Si estalla en el período de ascenso de los explotados -prerevolucionario o francamente revolucionario-, la huelga de hambre tiende a soldarse rápidamente con las masas, a impulsar otras formas de lucha de éstas. Si tiene lugar en plena derrota estará condenada e debatirse en medio del aislamiento y hasta de la indiferencia. La huelga de hambre minera formó parte de la movilización de la clase obrera y de otros sectores sociales de la población.

Los hechos confirman la validez de nuestra tesis y desmienten la formulada por la izquierda proburguesa. La huelga de hambre, luego de la firma del convenio-traición, entroncó en la huelga general de las minas, que tan dificultosamente fue suspendiéndose, y fue seguida por la activa preparación de una nueva y masiva movilización hacia la sede de gobierno. Los mineros demuestran estar dispuestos a repetir la marcha y el mismo ayuno voluntario. Esto pone en evidencia que la suspensión de la huelga de hambre no ha sido seguida por el desbande y el retroceso generalizado y sostenido.

La huelga de hambre -cuando tiene lugar en pleno ascenso- al adquirir carácter masivo y movilizado de considerables capas populares, se convierte en poderosa arma de presión, que puede permitir arrancar al gobierno y a la patronal insospechadas concesiones. La que se inició el primero de septiembre logró hacer retroceder al gobierno adenomovimientista; retroceso que tomó la forma de momentánea suspensión de la puesta en práctica del plan destructor de la COMIBOL, pero el retroceso -por culpa exclusiva de la burocracia colaboracionista- se convirtió en simple maniobra destinada, en último término, facilitar la ejecución del plan criminal. La mediación de la izquierda proburguesa no permitió sacar toda la ventaja posible del poderoso medio de presión que fue la huelga de hambre.

c)

La huelga de hambre -cuando no supera su naturaleza de forma de lucha pasiva y defensiva, utilizada por la desesperación que sigue a la derrota- tiene dos descomunales enemigos: el tiempo y la falta de publicidad, el aislamiento. El huelguista es víctima permanente de las terribles consecuencias del ayuno, que puede determinar que sea eliminado, tarde o temprano, del escenario. A medida que pasa el tiempo este riesgo se agiganta. Después de un poco más de dos meses de huelga de hambre sobreviene la muerte. Esta forma de lucha importa colocar en la balanza la propia existencia y así presionar poderosamente sobre el enemigo para poder arrancarle determinadas concesiones. Estamos suponiendo un ayuno voluntario llevado con toda estrictez y este fue el caso del piquete de la sección Animas de Siglo XX. Esta forma de lucha estaba desprestigiada en gran medida por los muchos subterfugios que acostumbraban utilizar supuestos huelguistas de hambre, a fin de neutralizar los tremendos efectos del ayuno prolongado. En una huelga de hambre aislada su fuerza arranca de llevar en su seno la inminencia de la muerte.

En los períodos reaccionarios, la patronal y el gobierno tienen siempre la posibilidad de aislar a los huelguistas de hambre y así debilitar la medida. No solamente se precisa una férrea voluntad para extremar el ayuno, sino un equipo en el exterior para propagandizarlo; la publicidad -difícil de lograr para los explotados- puede potenciarlo y el aislamiento debilitarlo.

En la huelga de hambre minera estas dos limitaciones fueron rápidamente superadas. Al tornarse en multitudinaria se convirtió en arma temible e inagotable. Por cada ayunador que era eliminado por su delicado estado de salud se sumaban diez. De esta manera la huelga de hambre amenazó con prolongarse por meses y meses y así actuar como medio de presión inagotable. Las burócratas no tomaron en cuenta para nada este hecho y tenían poderosas razones para actuar así.

Fue noticia para el país durante todo su desarrollo. Los periódicos, las radios, la televisión, los comentarios en las calles, inclusive los obligados comunicados oficiales, siguieron el desarrollo del movimiento minuto tras minuto. Al romper las limitaciones que inicialmente buscó imponer la clase dominante, se convirtió en torrente noticioso y encontró en sus propias entrañas la fuente de su fortalecimiento. Diariamente el país todo escuchaba el mensaje de los huelguistas desde los mismos socavones.

Se convirtió así en imbatible y concentró todos los problemas políticos y la misma crisis de la minería. Para los trabajadores nuevamente fue una lucha de vida o muerte, por eso que su traición los enfureció de manera inesperada, apareció como la traición a Bolivia toda, al proceso revolucionario en su conjunto.

Una huelga de hambre tan poderosa acabó reduciendo a cero la acción represiva gubernamental. Luego de haber doblegado las amenazas y las medidas represivas que inicialmente adoptaron las autoridades, el movimiento se desarrolló a sus anchas, sin limitaciones, se apoderó completamente del escenario.

Todo lo anotado demuestra que el gobierno ya estaba derrotado al convertirse la huelga de hambre en masiva. Derrotado por los obreros, por las masas, por los bolivianos, pero directamente apuntalado por la burocracia corrupta y traidora, que suscribió el vergonzoso acuerdo como si nada estuviera sucediendo en el país, de espaldas a la huelga de hambre, potenciando así a los dialogadores.

Los burócratas, que desde el primer momento descontaron el fracaso de la huelga de hambre, fueron desmentidos en el terreno de los hechos. Se asistió a una nueva derrota de los colaboracionistas y de los enemigos de la acción directa.

d)

No pocos temieron que, de igual manera que durante la marcha, la dirección revolucionaria que en todas las vicisitudes de la lucha permanece en el seno de las masas -pujante ante o agazapada- concluyese disuelta en medio de la multitud incorporada a la lucha. Durante la huelga de hambre sucedió todo lo contrario, lo que viene a evidenciar que la experiencia anterior no fue en vano, permitió a las masas madurar en grado suficiente

para poder soldarse con su auténtica dirección, con su eje revolucionario. Este es uno de los aspectos más remarcables de todo este proceso.

La dirección sindical tradicional -también la media- fueron arrastradas a la vorágine contra su voluntad y presintieron que el poderoso empuje de las masas amenazaba acabar con su largo reinado. No existían condiciones para que siguiese siendo dirección de los explotados, aunque detentaba el control de las palancas de mando de las organizaciones sindicales. De manera autoritaria, sin previa venia de la burocracia y, más bien, actuando contra ella, emergió una dirección revolucionaria, timoneada desde el primer momento hasta el último por el piquete de la Sección Animas.

Se puede resumir su posición -diametralmente opuesta a la de la burocracia- en el planteamiento categórico de que la respuesta de la crisis de la Corporación Minera de Bolivia debía ser básicamente política y no meramente técnica, lo que suponía el cuestionamiento de la legitimidad y capacidad del actual gobierno burgués. Por otro lado, la salvación de la minería -estrechamente unida a la liberación de Bolivia- solamente podía ser materializada por los propios trabajadores, planteamiento que se concretizaba en la consigna de la ocupación de las minas, tan claramente expresada en los documentos de Siglo XX e inclusive en una resolución del piquete de San José.

Como corresponde a una tendencia que emerge desde las entrañas de la clase, esa dirección encarnó los planteamientos formulados libremente por las bases, como es el caso de la liquidación total en condiciones capaces de asegurar la supervivencia temporal de los desocupados. Inicialmente el Partido Obrero Revolucionario -adelantándose en mucho a la eclosión de la tendencia hacia el retiro masivo- formuló, apoyándose en la propia legislación burguesa, la liquidación total y la recontractación simultánea, respuesta a la preocupación de mantener las minas en funcionamiento. Cuando las asambleas obreras plantearon el retiro, masivo, la dirección política de la huelga de hambre retomó el planteamiento y lo explicó en toda su proyección, volviendo a chocar con la burocracia que, en su estrechos mental, no ve en tal posición más que el afán de destruir a la clase obrera y a la vanguardia revolucionaria.

Dirección y masas aparecieron tan íntimamente ligadas -pese a que esa dirección traducía una elevada expresión del marxismo- que resultó difícil distinguirlas en la actividad cotidiana. No se trató de algo normal e inevitable, sino que fue la consecuencia de la gran radicalización de los explotados.

Los trabajadores no siempre permanecen, de manera invariable, en el puesto de combate, lo hacen de manera excepcional, también conocen el cansancio, el agotamiento de sus energías por efecto de una prolongada lucha y no únicamente como consecuencia de la derrota física.

La fuerza de la nueva dirección -que prácticamente se impuso a la burocracia y la arrinconó- radicó en la profunda movilización de las masas, actuando de manera directa. Todo aflojamiento de la movilización amenaza con debilitar a la dirección política revolucionaria. La mediación de tendencias intermedias entre las masas y las fracciones que encarnan la tendencia revolucionaria tienen el mismo efecto, debilitan a esta última.

La burocracia ha recibido un inicial y duro revés de parte de los trabajadores y éstos -actuando sin intermediarios- tienden, en la medida de su movilización y radicalización, a marginarla definitivamente del seno de los sindicatos.

Si la dirigencia obrera tradicional y burocratizada logra debilitar la presión de las bases imponiéndoles instancias deformadoras de su voluntad, puede desviar la presión de las bases, neutralizarlas o mediatizarlas en su provecho.

En este fenómeno -que tantas veces ya ha sucedido- puede basarse el retorno de la burocracia a la alta dirección de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Lo menos que puede decirse es que la derrota inicial de los dirigentes corruptos y antiobreros no debe ser considerada como definitiva y que siempre está presente el peligro de la desvirtuación de lo que hicieron las masas de manera tan espontánea. En fin, ha tenido lugar un importante episodio en medio de la larga lucha anti-burocrática, de cuyo éxito depende la salud del movimiento obrero y sindical.

Finalmente, la huelga de hambre como valioso método de lucha debe ser incorporada al arsenal de la clase obrera. Casi inmediatamente se desencadena una imponente movilización de masas y entonces volverá a ser reactualizada. La asimilación crítica de la experiencia pasada permitirá usarla exitosamente. Entonces nuevamente se agudizará la lucha obrera antiburocrática.

Estamos viviendo las vicisitudes de una descomunal movilización de masas, su aplastamiento por las fuerzas represivas podría iniciar un período reaccionario, cuya profundidad y duración estarán en relación con el alto nivel alcanzado por el empuje revolucionario. Un nuevo ascenso de masas partirá de lo conquistado hasta este momento, en nuestros días, y pugnará por superarlo.

V

Sobre el convenio-traicion

a)

El 13 de septiembre por la noche, cuando se sumaban más personas a los piquetes de huelga de hambre a lo largo y ancho del país y cuando los mineros demostraban estar dispuestos a profundizar sus medidas, fue firmado el vergonzoso convenio entre los burócratas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y los ministros portavoces del Poder Ejecutivo, bajo la mediación de la alta jerarquía eclesiástica. Diálogo y convenio transcurrieron a espaldas de las bases obreras, pese a que éstas advirtieron que no debía concluirse ningún acuerdo sin previa consulta a ellas. El convenio acabó pulverizado al enfrentarse con los huelguistas y con los trabajadores en general.

En la historia sindical se conocen innumerables casos de acuerdos concluidos al margen de la voluntad de las masas y de la constitución de virtuales frentes entre la burocracia y el gobierno para arrinconar a los protagonistas de las movilizaciones, casi siempre se obtuvieron victorias en este criminal propósito. Ahora los excesos y la conducta contraria a la existencia misma de los sindicatos le costó muy caro a la burocracia. También antes se registraron desconocimientos de los acuerdos entre el gobierno y la burocracia sindical, pero igualmente fueron impuestos, esto porque la presión de las bases concluyó debilitándose. Ahora ocurrió todo lo contrario, el desconocimiento del convenio desembocó en el desconocimiento de la propia burocracia. Estas diferencias son la consecuencia del grado de movilización y radicalización de las masas, de la evolución registrada por la conciencia de clase.

Al convenio-traición los trabajadores opusieron sus propias demandas, que no pudieron menos que ser desconocidas por las direcciones tradicionales, profundizándose así el abismo abierto entre el grueso de la clase y el puñado de burócratas, puñado inclusive teniendo en cuenta las camarillas largamente estructuradas a la sombra de los cargos de dirección.

El eje de la lucha se ha desplazado del convenio a las demandas formuladas en las diferentes asambleas sindicales. El hecho tiene una enorme significación política: ha sido sepultado el colaboracionismo de clase y se ha potenciado el anticapitalismo en el seno de las masas. ¿De manera definitiva? De ninguna manera. Si se produce la derrota de la movilización volverán a reflotar las viejas ideas y los prejuicios que el día de ayer ya se convirtieron en la armadura política de la burocracia, que de manera tan nítida aparece como contrarrevolucionaria y enemiga de los intereses y aspiraciones de los explotados.

b)

La esencia del convenio radica en que -en definitiva- viabiliza la ejecución del Decreto de destrucción de la COMIBOL N° 21377, Decreto que no toma en cuenta para nada el plan

de rehabilitación elaborado por la dirección de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia -respuesta a la crisis minera estrechamente técnica- viabiliza esa aplicación a través de una maniobra distraccionista: su postergación por algunos días. Se tiene la impresión de que el convenio salió de una conjura siniestra entre el gobierno burgués derechista y la burocracia entreguista para arrinconar al movimiento obrero, condición imprescindible para que pueda ejecutarse el plan de aniquilamiento de la minería estatizada. La burocracia aparece como el taparrabos que usa esa prostituta que es la dictadura policiaco-militar para presentarse como virgen seductora frente a las masas enfurecidas. Esa lacra del movimiento obrero volvió a su papel -esta vez sin mayor éxito- de domesticados de los explotados encabritados y resueltos a acabar con el estado de cosas imperante.

El desconocimiento masivo del convenio, excepción hecha de San José, Colquiri y alguna otra mina pequeña, importó la ratificación de una clara posición antigubernamental no en su expresión limitadamente democrática sino anticapitalista, antiburocrática. El impulso instintivo de las masas hacia la destrucción de la gran propiedad privada encontró en ese desconocimiento el canal de su expresión. Es claro que la burocracia -y menos el gobierno- no están capacitados para comprender este fenómeno, se les antoja el producto de una maniobra politiquera, de una zancadilla producto de pugnas de carrierillas, etc. No descubren que es por ese camino que recorre el proceso revolucionario.

Los burócratas tienen un caballito de batalla: dicen que han, logrado que la Corporación Minera de Bolivia se mantenga como empresa estatizada, cosa que también sostiene machaconamente el gobierno reaccionario desde la promulgación del decreto liberaloide y antiestatista N° 21060 y, más particularmente, del 21377, que concretiza la decisión de paralizar numerosas empresas y de destruir a la COMIBOL como empresa única. No hay que olvidar que para la dirección sindical burocratizada la preservación física de la COMIBOL -de igual manera que la solución de los más agudos problemas nacionales- sólo pueden lograrse entrando en componendas con el gobierno MNR-ADN, dando la espaldas de manera radical a la acción directa y a la independencia de clase, posición en la que está implícito el convencimiento de que la burguesía todavía puede resolver los problemas nacionales, sacar a flote al país de la crisis actual, en fin, desarrollar las fuerzas productivas. Esta postura reformista y francamente proburguesa sirve de cimienta ideológico a la tesis en sentido de que no es posible plantear la revolución social, la revolución timoneada por la clase obrera. Esta nueva expresión adquiere el convencimiento de que todavía corresponde a la burguesía timonear los procesos de modernización de la sociedad. Esto es puro stalinismo menchevique, que se concretiza en la táctica frentepopulista: sometimiento de las masas a la dirección burguesa democratizante. Este choque de posiciones radicalmente contrapuestas entre la revolución y la contrarrevolución es calificado por muchos como crisis de la FSTMB, como amenaza de su desaparición. Este criterio es falso; la pugna apasionada se convierte en la premisa del fortalecimiento o del debilitamiento -según la salida que encuentre- de la organización sindical.

El convenio dice: "La COMIBOL mantiene todas sus unidades de producción y de servicios, preservando su patrimonio y la propiedad estatal sobre los grupos mineros

nacionalizados". Esta es una declaración general, como tantas otras que registra el ordenamiento legal vigente. Lo que importa es saber cómo se concretiza. La propiedad estatal puede efectivizarse de muchas maneras y es esto, precisamente, lo fundamental. El documento añade que para la rehabilitación de la empresa se "tomarán en cuenta las modalidades de su plan -del gobierno, el Decreto 21377- de reestructuración" es decir, cerrando varias minas, cooperativizando otras, imponiendo la descentralización administrativa, otra forma de suspensión del trabajo, conjunto de medidas que conducen a la privatización de la COMIBOL. Es esto lo que ha aceptado la burocracia detrás de un débil barniz de palabrería confusa y equívoca. La burocracia sindical se ha colocado al servicio del gobierno, de la ejecución de su plan, cuyo aplastamiento se ha convertido en uno de los objetivos del movimiento obrero.

La declaración general sobre el mantenimiento de "todas las unidades de producción y servicios de la COMIBOL, no supone que no se cerrarán las minas o no se cooperativizarán y ni siquiera que estos planes serán postergados indefinidamente. Esto debe quedar aclarado con toda nitidez, aclaración que desenmascara a la burocracia como con contra-revolucionaria. Según la constitución "Son del dominio originario del Estado... todas las sustancias del reino mineral"; declaración tan solemne, sirve, precisamente, para la entrega legal de los yacimientos minerales a empresas privadas. El Estado es burgués, lo que explica que su acción se encamine a preservar la propiedad privada sobre las minas, pese a que su "dominio originario" le corresponde. Igual criterio tiene que aplicarse a la declaración de que la COMIBOL mantiene todas sus unidades de producción -no quiere decir que estén siempre produciendo, funcionando, sino que corresponde al ámbito productivo- y de servicios. A mayor abundamiento recordemos que la legislación específicamente minera -desde la convención liberal de 1880- distingue entre propiedad del suelo y del subsuelo y reconoce el derecho originario del Estado sobre los yacimientos minerales, quiere decir que no se pierde aunque su usufructo pase a otros. No olvidemos que en ese marco legal las minas siempre han ido a parar a manos del imperialismo. Según el código civil -una defectuosa traducción del código Napoleón, máxima expresión del derecho de propiedad privada burguesa- el propietario puede disponer a su antojo de su propiedad, con la única limitación de que cumpla una "función social" -1938-: venderla, arrendarla, constituir sociedades de todo tipo para su explotación, etc. Es claro que la COMIBOL puede cerrar las minas, alquilarlas, formar sociedades con el capital financiero para mantenerlas trabajando -que en realidad significaría su entrega al imperialismo-, etc., sin perder la propiedad sobre ellas, inclusive manteniendo el régimen de nacionalización. El argumento de la burocracia en sentido de que ha impedido la desnacionalización de la COMIBOL queda reducido a nada.

Los dirigentes corrompidos, incapaces y contra-revolucionarios, han pretendido engatusar a los trabajadores con el argumento de que genialmente lograron levantar impedimentos para el cierre y la cooperativización, sino por constituir un simple pretexto para la privatización de las minas, jugando el mismo papel distraccionista de la postergación por algunos días de la aplicación del decreto desnacionalizados. En los argumentos de la burocracia todo es falsedad, demagogia, tontería. El gobierno concentra todo el instinto de mando que la clase dominante ha ido acumulando a lo largo de los años y resulta improbable que pueda ser engañado por los burócratas serviles.

Los hechos ya han dicho su última palabra: el único beneficiado de este convenio y otros anteriores de igual corte ha sido el gobierno, representante de la burguesía en su conjunto. ¿A qué se reducen esos supuestos obstáculos ideados por la burocracia? Según el convenio, la COMIBOL puede cerrar las empresas y cooperativizarlas cumpliendo algunas formalidades sin mayor trascendencia -estamos hablando de formalidades y no de sometimiento a dictámenes de otras instituciones- y sin plazos. La prueba de lo que sostenemos se tiene en el primer punto: "Para proceder al cierre de una operación minera... se recabarán opiniones de entidades... tales como universidades, SITCOM-" No dice -y esto hay que subrayar- que la COMIBOL se someterá a esas opiniones, sino simplemente de que las recabará, sin señalar qué destino tendrán las opiniones. El supuesto obstáculo no es tal, es una simple formalidad intrascendente. Ya sabemos lo que sucederá: los informes serán recabados y si fuesen contrarios a los designios gubernamentales se los desechará simplemente, tal vez comentando que no son más que opiniones políticas, etc. Las gerencias decidirán el cierre de las minas y hasta puede llegarse al extremo de escuchar la opinión de los obreros, todo para cubrir las apariencias.

Con la cooperativización sucede algo parecido. Su adopción se la condiciona a "Los estudios de... viabilidad o inviabilidad". La COMIBOL siempre sabrá encontrar montones de estudios y entre éstos algunos favorables para sus planes. La decisión de cooperativización ha sido tomada y se la llevará a la práctica cuando crea oportuno la gerencia respectiva. Por el momento se posterga su aplicación -de la misma manera que la del plan de destrucción de la COMIBOL-, pero sólo se la posterga, no se la elimina definitivamente, que es lo que plantearon los obreros.

Eso de entregar a las corporaciones de desarrollo la preservación de la economía de los departamentos de Oruro y de Potosí; así como las generosas promesas de poner a salvo el porvenir y la salud de los despedidos, no es más que palabrería vacía que ya se ha llevado el viento. El gobierno ni siquiera ha podido establecer el subsidio para los desocupados.

Víctor Paz y sus ministros han reiterado que la política económica y el plan de rehabilitación de la COMIBOL están en plena vigencia. Guillermo Bedregal ha añadido que la cooperativización de algunas minas está en pie. A esta remarcable victoria del gobierno ha conducido el famoso convenio, tan acertadamente calificado como traidor.

Luego de que el famoso convenio fue airadamente repudiado por todos los sindicatos, el gobierno se apresura en dismantelar algunas empresas, de poner en ejecución su plan desnacionalizados. La meta señalada por la COMIBOL está siendo alcanzada, pese a los obstáculos que dice haber levantado la burocracia.

Nota necesaria:

Los planteamientos del Partido Obrero Revolucionario sobre la crisis de la minería son hechos dentro de la perspectiva de que la propia acción de los trabajadores abre la perspectiva de la lucha por la conquista del poder, por esto mismo dentro de la proyección de reivindicaciones transitorias.

La izquierda proburguesa responde que ese planteamiento equivale a sostener que la revolución proletaria se encuentra a la vuelta de la esquina y que por eso es utópica y aventurera.

La verdad es que el POR no dice eso, se limita a señalar que la solución radical del problema de la COMIBOL es política, es decir, que cuestiona al gobierno actual y que las masas al luchar por salvar a las minas necesariamente madurarán para plantearse la urgencia de expulsar del poder a la burguesía nativa incapaz.

Más tarde o más temprano? La respuesta la dará la propia lucha de los explotados. El POR se limita a expresar políticamente la experiencia que acumulan los trabajadores en su lucha diaria y contribuye a su modo en la maduración de la conciencia de clase, lo que significa trabajar en favor del cumplimiento de la revolución proletaria.

Octubre de 1986